

**1.6. DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CASTILLA-LA MANCHA
(pp. 2-34)**

—

**1.6. DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CASTELLA-LA MANXA (pp. 35-
65)**

NURIA MARÍA GARRIDO CUENCA

Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu

Universidad de Castilla-La Mancha

Sumario: 1. Panorámica y valoración general de las actuaciones ambientales en el período de enero a mayo de 2011. 2. Actuaciones en materia de espacios naturales. 2.1. Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. 2.2. Declaración del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 2.3. Aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Las Lagunas y Albardinales del Gigüela y declaración de la Reserva Natural de Las Lagunas y Albardinales del Gigüela. 2.4. El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. 3. La modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza en materia de caza, especies exóticas y reproducción en cautividad de especies amenazadas. 4. Regulación institucional y orgánica de organismos con competencia en materia de aguas: el Consejo del Agua y el ente Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. 4.1. La organización del agua como recurso natural y de valor medioambiental: los órganos autonómicos de gestión y protección de las aguas y la importancia de la participación de los interesados. 4.2. El Consejo del Agua de Castilla-La Mancha como órgano consultivo y de participación en materia de aguas. 4.3. El ente de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha: regulación estatutaria. 4.4. La ampliación del Programa de protección de las aguas frente a la contaminación de origen agrario impuesta por la Comisión Europea. 5. Actuaciones en materia de energías renovables. 5.1. Panorámica general: un modelo afín y a la vez contrario al escenario de “sostenibilidad ambiental” de la Ley de Economía Sostenible. 5.2. Eficiencia energética de los edificios: la adaptación a la normativa europea y las medidas que se adelantan a las “políticas públicas para un medio urbano sostenible” de la Ley de Economía Sostenible. A. El procedimiento de certificación de la eficiencia energética y verificación de la conformidad: un ejemplo de autorregulación. B. Registro autonómico de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios y Entidades de Verificación de la Conformidad. 5.3. Creación del Canon Eólico y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha. A. La naturaleza del canon eólico: ¿un impuesto realmente ecológico? B. La regulación del Canon Eólico. C. El Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía. 6. Residuos. 6.1. La incorporación de medios telemáticos en materia de residuos peligrosos y destrucción de vehículos tras la baja de su vida útil. 6.2. El desarrollo del Plan de Gestión de Residuos Urbanos: autorización y notificación de puntos limpios. 7. Novedades en materia de montes: la creación del Registro de Montes Protectores y el Registro de Montes Singulares de Castilla-La Mancha y la actualización de los convenios y consorcios de repoblación forestal.

1. Panorámica y valoración general de las actuaciones ambientales en el período de enero a mayo de 2011

El período analizado ha sido especialmente destacado tanto cuantitativa como cualitativamente en la normativa aprobada. Son muchos los ámbitos y sectores que se han visto afectados por el legislador y el ejecutivo autonómico. Entre ellos destacamos la declaración de parques naturales, que consolida las actuaciones del período anterior en la Sierra Norte de Guadalajara, Alcudia y Sierra Madrona; algún nuevo plan de ordenación de recursos naturales, y la modificación operada en la Ley autonómica de conservación de la naturaleza en materia de caza, para dar respaldo normativo a la práctica actual de la caza y la cría de cetrería. En materia organizativa, finalmente ha sido aprobada la norma que regula el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, de forma que así se completa la composición institucional de la Agencia del Agua, huérfana hasta el momento de su órgano de representación y participación social en el gobierno del agua. Junto a esta regulación, se ha dado luz verde también a la aprobación de los Estatutos del ente de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que sustituye al anterior ente público Aguas de Castilla-La Mancha y adapta su

regulación orgánica y de funcionamiento a la normativa vigente. También en el ámbito de las energías renovables se han producido dos actuaciones de valoración dispar, que comentaremos en detalle. La primera se refiere a la creación de un impuesto sobre las instalaciones de energía eólica, el denominado Canon Eólico, y el inespecífico Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha, que, pese a lo rimbombante de su nombre, tiene funciones más bien escuetas y de orden meramente recaudatorio; la segunda debe valorarse muy positivamente, pues, adelantándose incluso a la legislación estatal que deberá trasponer la normativa comunitaria referida a la eficiencia energética de los edificios e incluso a las previsiones sobre el particular que se contienen en la reciente Ley de Economía Sostenible, configura un novedoso régimen en materia de eficiencia y certificación energética de los edificios de Castilla-La Mancha. En materia de residuos, también se han llevado a cabo varias actuaciones en este período, destacando la creación de la Red de Puntos Limpios y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información para la tramitación electrónica del registro de destrucción de vehículos tras su vida útil y de traslado de residuos peligrosos, de forma que el sistema administrativo ha ganado en eficacia y se ha adaptado a las exigencias normativas de la Administración electrónica regional aprobadas recientemente. También han sido objeto de atención desde esta perspectiva —actualizando una situación de hecho especialmente gravosa para los particulares— los convenios y consorcios de repoblación forestal, que se han adecuado a la normativa de montes estatal y autonómica aprobada ya hace algún tiempo. En este ámbito destaca asimismo la creación del Registro de Montes Protectores y el Registro de Montes Singulares de Castilla-La Mancha, cuya situación anómala se ha corregido con la importante norma aprobada en este período.

Por lo tanto, en líneas generales, la valoración del período analizado es bastante positiva, destacando la actualización y revisión de políticas y normativas para su adaptación a normativas europeas, estatales y autonómicas recientes.

2. Actuaciones en materia de espacios naturales

El período analizado ha sido bastante fructífero en la continuación de actuaciones anteriores, que deben seguir la tramitación oportuna y de las que ya se dio cuenta en la crónica anterior. Así, ha sido aprobada, mediante la correspondiente ley, la declaración

del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. En este contexto, y como nueva actuación, se ha aprobado en este período el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Lagunas y Albardinales del Gigüela y se ha procedido a la declaración de este paraje como reserva natural en el ámbito autonómico.

2.1. Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara, aprobado por Decreto 215/2010, de 28 de septiembre, preveía el establecimiento de la figura de protección de parque natural para el espacio natural localizado en varios términos municipales de la provincia de Guadalajara, con una superficie aproximada de 117.898 hectáreas, por reunirse los requisitos exigidos en el artículo 41 de la Ley autonómica 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

De acuerdo con esta norma, el objetivo específico de esta figura jurídica, aplicada a la realidad del espacio en cuestión, es asegurar la conservación de los valores naturales de la zona, procurando su restauración cuando se encuentren degradados, así como fomentar los aprovechamientos tradicionales y el turismo de naturaleza, de forma que queden sentadas las bases de un desarrollo sostenible. Así es aprobada la Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara (DOCM de 22 de marzo de 2011).

El relieve de la Sierra Norte de Guadalajara es muy accidentado y conforma un conjunto montañoso que incluye diversas sierras y macizos donde se localizan las tres cumbres de mayor altitud de Castilla-La Mancha: el pico del Lobo (2.273 m), el Cerrón (2.199 m) y la Peña Cebollera Vieja o pico de las Tres Provincias (2.129 m). Estos sistemas montañosos son surcados, además, por las cuencas hidrográficas de los ríos Jaramilla, Jarama, Lozoya, Sorbe y Bornova, todos ellos pertenecientes a la cuenca del Tajo. Cerrando esta valiosa orografía, cabe destacar los importantes embalses de El Vado, Beleña y Alcorlo. Por ello no es extraño que su riqueza faunística y paisajística sea de tal relevancia. Esta zona destaca por su gran diversidad litológica, completada con enclaves de gran interés mineralógico y petrológico (Hiendelaencina, El Cardoso, etc.), así como por su gran abundancia y diversidad de elementos geomorfológicos, la mayoría de ellos considerados de interés especial según la Ley 9/1999. Además, el área

se caracteriza por su excepcional importancia botánica, al albergar especies únicas a escala regional. La Sierra Norte de Guadalupe tiene también una gran importancia por sus comunidades de fauna, como se destaca en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, sobresaliendo la comunidad de rapaces rupícolas, con poblaciones de águila perdicera, catalogada en Castilla-La Mancha como “en peligro de extinción”.

Desde el punto de vista del paisaje, el área incluye paisajes de montaña únicos en Castilla-La Mancha por sus características excepcionales y la excelente conservación del medio natural, destacando la denominada arquitectura negra, elemento del patrimonio cultural de prioritaria conservación. No debe olvidarse que en el nuevo parque natural se ubican tres espacios ya incluidos en la Red Regional de Áreas Protegidas: el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, la Reserva Natural del Pico del Lobo-Cebollera y la Reserva Fluvial del Río Pelagallinas.

Pues bien, a fin de garantizar la homogeneidad y simplificar la gestión del territorio, la Ley que comentamos elimina las figuras del Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra y la Reserva Natural del Macizo del Pico del Lobo-Cebollera, que se integran en el nuevo parque natural como una zona de protección especial, con un régimen de usos y actividades propio. Ello, como bien aclara el preámbulo de la norma, no debe suponer la pérdida de singularidad de estos espacios, ya que ambos representan la biodiversidad y los valores naturales del conjunto del Parque Natural, y, por ende, serán referencia ineludible en su gestión específica. Dada la especificidad y las características de la Reserva Fluvial del Río Pelagallinas, que además es refugio de pesca, se considera necesario que continúe en vigor.

Al mismo tiempo, el macizo del pico del Lobo-Cebollera, de especial relevancia natural, se incluye en la zona de especial protección para las aves y lugar de importancia comunitaria denominada Sierra de Ayllón, por lo que se integra en la Red Natura 2000 en aplicación de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, lo que supone el compromiso por parte de la Comunidad Autónoma de mantener los hábitats y las especies amparados por ambas normas en un estado de conservación favorable, así como de dotar al espacio natural de un plan de gestión adecuado a sus necesidades de conservación.

Otra de las medidas contenidas en la Ley ha sido la desafectación de la Reserva de Caza de Sonsaz, incluida originariamente en la reserva nacional del mismo nombre desde 1973, que pasa a ser designada reserva de caza “en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha” (*ex* DA 1.^a de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha). Esta desafectación legal se produce una vez cumplido el principal objetivo de la reserva —la recuperación de poblaciones de corzo—, y dada la existencia de figuras alternativas que pueden garantizar una oferta de caza social.

En definitiva, la Ley 5/2011 condensa la aplicación del régimen de protección previsto en el Plan de Ordenación para el territorio propuesto como Parque Natural, cuyos límites se ajustan con una base cartográfica más reciente y detallada. En este sentido, establece el régimen aplicable a los usos, los aprovechamientos y las actividades, contiene el mandato de elaboración de un plan rector de uso y gestión, y crea las figuras de la Junta Rectora, como órgano consultivo, y del director-conservador, como responsable de la gestión. Complementariamente, establece un área de influencia socioeconómica con el fin de contribuir al mantenimiento del Parque Natural, fomentar el desarrollo rural, compensar socioeconómicamente a las poblaciones afectadas y lograr que, al igual que otros espacios de la región para sus respectivas zonas de influencia, el Parque Natural sea un elemento de garantía del uso sostenible de sus recursos naturales y de impulso socioeconómico de los municipios que lo conforman.

2.2. Declaración del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, aprobado mediante Decreto 214/2010, de 28 de septiembre, preveía el establecimiento de la figura de protección de parque natural para este espacio natural localizado en la provincia de Ciudad Real, en los términos municipales de Almodóvar del Campo, Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava y Solana del Pino, con una superficie aproximada de 149.463 hectáreas. A la declaración de parque natural ha procedido la Ley 6/2011, de 10 de marzo (DOCM de 22 de marzo de 2011).

Este futuro parque natural es un espacio del territorio manchego con un excelente grado de conservación de sus ecosistemas, lo que le otorga una excepcional importancia desde el punto de vista de la conservación del patrimonio geológico, la biodiversidad y el

paisaje de Castilla-La Mancha. Prueba de ello es el reconocimiento que se le ha venido dando, materializado en la salvaguarda de parte del territorio mediante otras figuras de protección como son las áreas críticas para especies tan emblemáticas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico; los monumentos naturales de Los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida, la Laguna Volcánica de La Alberquilla y el Volcán del Alhorín, y las microrreservas del Túnel de Niefla, la Mina de los Pontones, los Refugios de Quirópteros de Fuencaliente y, parcialmente, los Túneles de Ojailén.

La zona presenta puntos muy relevantes de interés geológico de diversa naturaleza y características, que destacan por su singularidad y su representatividad dentro del ámbito regional. Muchos de ellos se corresponden con alguno de los elementos geomorfológicos de interés especial catalogados en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. En cuanto a la vegetación, la que se encuentra en el ámbito territorial del Valle de Alcudia está muy influida por el uso ganadero tradicional, con amplias extensiones cubiertas por dehesas de encina, majadales y otros pastizales anuales, mientras que en la parte de Sierra Madrona se conservan en buen estado vestigios de diferentes tipos de bosque mediterráneo. También su importancia zoológica es extraordinaria, estando incluida en la zona de especial protección para las aves denominada Sierra Morena. Actualmente tiene la consideración de zona sensible para la conservación del águila imperial ibérica, el buitre negro y la cigüeña negra. La zona es también muy importante para el águila real, el águila perdicera, el alimoche, el buitre leonado, el halcón peregrino y el búho real. En lo que se refiere a los mamíferos, esta sierra constituye el hábitat de unas poblaciones en extremo amenazadas de lobo y lince.

Adicionalmente, se ha puesto de manifiesto su importancia para la conservación de numerosos hábitats y taxones incluidos en los anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE, así como de especies incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE, configurándose como área importante para la conservación de la biodiversidad de la Unión Europea susceptible de formar parte de la Red Natura 2000.

Como en el caso del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, la Ley fija, de modo prácticamente idéntico, el régimen jurídico del nuevo parque, estableciendo igualmente un área de influencia socioeconómica con idénticos fines.

2.3. Aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Las Lagunas y Albardinales del Gigüela y declaración de la Reserva Natural de Las Lagunas y Albardinales del Gigüela

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno castellano-manchego de 2 de diciembre de 2008 se acordó la iniciación del procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Las Lagunas y Albardinales del Gigüela. Los estudios realizados en la fase inicial de redacción confirmaron sin lugar a dudas la relevancia, la singularidad y el interés de las lagunas, tanto desde el punto de vista paisajístico y geológico, como biológico, faunístico y de la flora.

El objetivo principal del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que acaba de ser aprobado por el Decreto 13/2011, de 22 de marzo (DOCM de 25 de marzo), es adecuar la gestión de sus recursos naturales, en especial de los protegidos, a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Y, al mismo tiempo, contribuir a mantener en un estado favorable las especies de aves señaladas en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE, y los hábitats y las especies comprendidos en los anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE que tengan presencia en el territorio.

El Plan de Ordenación afecta total o parcialmente a cuatro términos municipales en las provincias de Toledo y Ciudad Real, y comprende una superficie de 4.827 hectáreas.

La zona está incluida en el lugar de importancia comunitaria ES4250010, Humedales de la Mancha, y en la zona de especial protección para las aves ES0000091, Humedales de la Mancha. En el sur se encuentra el refugio de fauna formado por las fincas Dehesa Presa Rubia, Rabo de Pastrana y Largas del Gigüela, y todo el ámbito territorial del Plan de Ordenación forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

El río Gigüela, el principal curso de agua de la zona, atraviesa la Reserva Natural de noreste a sur y se caracteriza por su elevada irregularidad. Por su parte, el río Riánsares, afluente del Gigüela, entra en la Reserva Natural por el norte, y desemboca en la laguna del Taray, ejemplo destacado de llanura de inundación asociada a cauce fluvial, aparte de todo un conjunto de humedales artificiales de singular importancia para la avifauna y donde se localiza vegetación de gran interés. Desde el punto de vista faunístico, el elemento más destacado son las poblaciones de aves acuáticas asociadas a las lagunas,

siendo una zona propicia para la cría e invernada de numerosas especies amenazadas.

En el procedimiento administrativo de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se han seguido las prescripciones del título II de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, habiéndose otorgado audiencia a los interesados, así como realizado los trámites de información pública y consulta a los intereses sociales e institucionales afectados. El Plan de Ordenación también ha sido informado favorablemente por el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

2.4. El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Hoces del Cabriel

Aunque no sea una norma castellano-manchega, dado que afecta a un espacio protegido intercomunitario, debe recordarse que el Decreto 45/2011, de 29 de abril, ha aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en cumplimiento de los artículos 37 a 41 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y del artículo 30 de la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

3. La modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza en materia de caza, especies exóticas y reproducción en cautividad de especies amenazadas

La Ley 11/2011, de 21 de marzo (BOE de 3 de mayo), ha introducido la modificación de dos preceptos de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, el artículo 71, referido a la tenencia, la cría en cautividad y el comercio de especies exóticas, y el artículo 82, sobre regulación de la reproducción en cautividad de fauna amenazada. Esta revisión venía ya exigida por las reformas incorporadas a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y el Decreto autonómico 11/2009, de 10 de febrero, por el que se regula la práctica de la cetrería en nuestra Comunidad Autónoma. Pero ha sido consecuencia, fundamentalmente, de la declaración, el pasado 17 de noviembre de 2010, de la cetrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. En cuanto especies amenazadas, la cría en cautividad de estas aves rapaces estaba prohibida en la Ley de Conservación de la Naturaleza, mientras que la Ley de Caza, desde el año 2006, autorizaba la práctica de la caza con ellas y su reproducción en cautividad, lo que no dejaba de ser una paradoja. Por otro lado, la práctica de la cetrería que se reguló en el

Decreto 11/2009 citado sostenía como una de las razones para autorizar esta actividad la existencia de un mercado legal de tales aves suministrado por la cría en cautividad, lo que abría un nuevo escenario que hacía posible la realización de tal práctica sin poner en peligro las poblaciones silvestres de aves rapaces.

Con la reforma normativa acaecida mediante la Ley autonómica que comentamos, pasa a estar permitida la cría en cautividad, que se somete a los controles y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por los organismos competentes —que en el caso de nuestra Comunidad Autónoma recae en la Consejería competente en materia de caza—, y que siempre es tratada como una actividad reglada sometida a autorización previa. Es importante recordar que, actualmente, la cetrería se practica exclusivamente con ejemplares nacidos y criados en cautividad, siguiendo un proceso regulado y controlado por la Secretaría General de Comercio Exterior, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que es la autoridad administrativa designada en el ámbito de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

4. Regulación institucional y orgánica de organismos con competencia en materia de aguas: el Consejo del Agua y el ente Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

4.1. La organización del agua como recurso natural y de valor medioambiental: los órganos autonómicos de gestión y protección de las aguas y la importancia de la participación de los interesados

El agua se concibe como un patrimonio, un activo social, ambiental y económico directamente relacionado con el bienestar de los ciudadanos. El agua es, efectivamente, un bien común de todas las personas y, en este sentido, los ciudadanos y la sociedad, en general, tenemos el derecho a utilizar y a disfrutar de este recurso; pero al mismo tiempo tenemos la obligación de contribuir a evitar el deterioro de las masas de agua y de preservarlas, en condiciones de cantidad y calidad adecuadas, en beneficio de las generaciones futuras.

Por ello, en Castilla-La Mancha se constituyeron el Consejo Regional del Agua (Decreto 41/2006, de 18 de abril) y, más recientemente, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, creada por la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, y constituida

formalmente desde el 7 de julio de 2010. En la actualidad este es el organismo administrativo con el que el Gobierno regional defiende los derechos de los castellano-manchegos en materia de agua y participa en la planificación hidrológica nacional. Sin embargo, la protección de los recursos hídricos no solo ha de ser un compromiso de los poderes públicos, sino también una responsabilidad de todos los sectores, usuarios y agentes implicados en el uso y la gestión del agua, y de la ciudadanía en general, que deberá incorporar la eficiencia en el uso del agua y el respeto al medio ambiente.

La preocupación por la consecución de un modelo de desarrollo sostenible que haga compatible la garantía de agua suficiente para el crecimiento y el desarrollo económico y poblacional con el respeto al medio ambiente, exigida por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, se ha traducido en una creciente implicación y participación en la defensa de los derechos del agua en todas las comunidades autónomas. Y en este sentido, y por así exigirlo la normativa estatal en materia de aguas, resultaba imperiosa la regulación del régimen jurídico de un órgano de consulta y de participación en materia de agua en el que tengan cabida todas las administraciones públicas, agentes, sectores y usuarios implicados y la sociedad en general.

Como peculiaridad, en nuestra autonomía destaca la especial trascendencia que se atribuye a este órgano en la revisión de los planes hidrológicos. Castilla-La Mancha, por su situación geográfica en el centro peninsular, está presente en siete demarcaciones hidrográficas (Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero) y es importante que en todas y cada una de estas demarcaciones hidrográficas puedan verse satisfechas, con todas las garantías, nuestras necesidades hídricas presentes y futuras y que se aseguren caudales ambientales suficientes para garantizar la estructura y funcionalidad de nuestros ecosistemas. En este sentido, el órgano que en virtud de esta ley se regula contará, entre sus representantes y en función de su ámbito territorial, con usuarios de las distintas demarcaciones hidrográficas, y participará activamente en todo el proceso de planificación y posterior gestión y seguimiento de los planes hidrológicos que afecten a Castilla-La Mancha.

4.2. El Consejo del Agua de Castilla-La Mancha como órgano consultivo y de

participación en materia de aguas

De acuerdo con el espíritu participativo que debe presidir la organización eficaz y sostenible del agua, la Ley 8/2011, de 21 de marzo, crea el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, con lo que da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 3.3 de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

Según la norma que comentamos, el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha es un órgano consultivo y de participación en materia de agua adscrito —a efectos administrativos— a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. La naturaleza de sus funciones es variada, primando aquellas referidas al uso sostenible del recurso. En concreto, de acuerdo con el artículo 2 de esta norma, estas funciones son:

- “a) Informar los anteproyectos de ley y otras disposiciones generales en materia de aguas que hayan de proponerse para su aprobación al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
- b) Informar los planes y proyectos de interés regional que afecten sustancialmente a los usos de agua.
- c) Plantear iniciativas destinadas al uso racional y mejora de la calidad y al buen estado ecológico de las masas de agua en el ámbito de Castilla-La Mancha.
- d) Emitir informes y atender a las consultas planteadas en los supuestos que las normas dispongan.
- e) Emitir informe sobre cuestiones relativas al agua que puedan serle consultadas por el Consejo de Gobierno o por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y por las Cortes de Castilla-La Mancha.
- f) Participar en la planificación hidrológica que realice la Administración del Estado emitiendo informe sobre cuantos documentos sean sometidos a información pública”.

La composición y estructura del Consejo es muy similar a la de sus homólogos autonómicos:

- Una presidencia (que ocupa el presidente de la Agencia del Agua).
- Una vicepresidencia (que recae en el titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia).

- Unos vocales natos (los titulares de casi todas las direcciones generales de la Administración regional, hasta 12, y el titular de la Dirección-Gerencia de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, el titular del órgano gestor competente en materia de Universidades, Investigación e Innovación y el letrado-jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades).
- Vocalías designadas del Consejo del Agua, en representación de la Administración hidráulica del Estado, la Administración local, las organizaciones sociales, económicas y ambientales, y expertos de reconocido prestigio (un representante de la Administración hidráulica del Estado, dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias, un representante de la asociación empresarial más representativa de la región, dos representantes de los sindicatos de trabajadores más representativos de la región, dos representantes de asociaciones de defensa del medio ambiente con ámbito de actuación en la región, un representante de la Universidad de Castilla-La Mancha, un representante del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha y dos personas expertas de reconocido prestigio en materias relacionadas con el agua).
- Vocalías designadas del Consejo del Agua, en representación de usuarios de todas las demarcaciones hidrográficas que afectan a Castilla-La Mancha, que corresponderán a tres representantes de las asociaciones profesionales agrarias de mayor implantación en la región; un representante de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha; un representante de los consumidores, y nueve representantes de los usos más significativos de las distintas demarcaciones hidrográficas en las que participa Castilla-La Mancha.

En esta estructura orgánica, la Secretaría del Consejo corresponderá a personal funcionario de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha designado por el presidente, que actuará con voz pero sin voto.

Asimismo, se regulan en la Ley el sistema de destitución y sustitución de sus miembros, el régimen de las convocatorias y su funcionamiento, las normas para su válida constitución y el orden de las sesiones y actas del Consejo.

4.3. El ente de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha: regulación estatutaria

El Decreto 7/2011, de 8 de febrero, procede a la regulación de los Estatutos del ente público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Como recordatorio, la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua en nuestra Comunidad Autónoma, creó la entidad de derecho público Aguas de Castilla-La Mancha, y habilitó al Consejo de Gobierno para dictar los Estatutos de este ente. Más tarde, la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, en su disposición adicional primera sustituye la denominación de la entidad por la de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, manteniendo su personalidad jurídica y su plena capacidad de obrar. Además, adscribe dicha entidad a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección-Gerencia de esta. La Ley mencionada aprovechó para incorporar una serie de modificaciones en el funcionamiento y organigrama de la entidad que obligaban a la adaptación del estatuto vigente hasta ahora (Decreto 167/2002, de 26 de noviembre).

El Decreto que analizamos contiene los Estatutos de este ente de derecho público, en desarrollo de las previsiones legales citadas. En él se regulan pormenorizadamente las funciones de sus órganos, favoreciendo el ejercicio de las competencias de gestión y administración por parte de los órganos unipersonales (Presidencia, Vicepresidencia y Dirección-Gerencia), y reservando las funciones de deliberación y toma de decisiones finales y estrategias de actuación al Consejo de Administración.

Además, las normas sobre el funcionamiento de la entidad y el régimen jurídico y económico están claramente inspiradas en la legislación básica para el funcionamiento de los órganos colegiados, con sumisión estricta, por lo tanto, al derecho administrativo.

Como ente dependiente funcionalmente de la Agencia del Agua, la desconcentración funcional y objetiva de sus competencias se centrará en la ejecución y gestión de toda clase de infraestructuras hidráulicas, y en la gestión de infraestructuras hidráulicas de interés regional, así como en la gestión y recaudación del Canon de Aducción y del Canon de Depuración previstos en la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Además, en su objeto destaca la realización de todas aquellas actividades en relación con el abastecimiento y la depuración del agua que le sean encomendadas por la Junta de

Comunidades. Y entre ellas destacan, en relación con nuestro estudio, la facultad de “propuesta de la suscripción de convenios y la actuación coordinada de las respectivas competencias sobre abastecimiento de agua y sobre alcantarillado, saneamiento, depuración, reutilización de las aguas residuales y regadíos” (art. 3.h), y la creación y el mantenimiento de los censos de sistemas de abastecimiento y de depuración de la Región (art. 3.i).

4.4. La ampliación del Programa de protección de las aguas frente a la contaminación de origen agrario impuesta por la Comisión Europea

La Orden de 7 de febrero de 2011 modifica la Orden de 4 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, que aprueba el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 15 de abril de 2011). Esta regulación deriva del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 91/676/CEE), que atribuyó a las comunidades autónomas la competencia para la designación de las zonas vulnerables (todas aquellas áreas del territorio que por escorrentía o por percolación contribuyan a este tipo de contaminación). En Castilla-La Mancha esta designación se lleva a cabo mediante las resoluciones de 7 de agosto de 1998 y de 10 de febrero de 2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Como paso previo para esta designación, deben ser determinadas las masas de agua afectadas, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario, siendo el programa de actuación vigente en Castilla-La Mancha hasta el momento el contenido en la Orden de 4 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.

La necesidad de disponer de una nueva norma actualizada, a la que responde la reciente Orden de 2011, queda plenamente justificada teniendo en cuenta tres hechos determinantes: un reciente dictamen motivado de la Comisión Europea en el que se considera que se detectan determinadas irregularidades en nuestro programa autonómico; lo establecido en la disposición transitoria de la Orden de 21 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el mantenimiento de las zonas vulnerables designadas anteriormente y se incorpora Campo

de Calatrava, y, finalmente, la designación de las aguas afectadas mediante la Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario a las cuencas intercomunitarias.

Por lo tanto, la Orden más reciente aprueba un nuevo programa de actuación, con vigencia de cuatro años y aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en Castilla-La Mancha, que corrige los déficits señalados por la Comisión Europea y amplía las zonas vulnerables recogidas anteriormente, para evitar una mayor dispersión normativa. Así, se incluyen en las citadas zonas vulnerables los siguientes términos municipales:

- a. Algora (Guadalajara), en la zona vulnerable Alcarria-Guadalajara.
- b. Corral-Rubio (Albacete), en la zona vulnerable Mancha Oriental.
- c. Pétrola (Albacete), en la zona vulnerable Mancha Oriental.

Además, con objeto de incluir los términos municipales que en las resoluciones de designación pertenecían a otros y de dar mayor coherencia territorial a las zonas designadas, estas se amplían con los siguientes términos municipales:

- En la zona vulnerable Alcarria-Guadalajara: Marchamalo, San Andrés del Congosto, Terrinches y Almoguera (todas en Guadalajara).
- En la zona vulnerable Mancha Occidental: Arenales de San Gregorio (Ciudad Real).
- En la zona vulnerable Mancha Oriental: Pozo Cañada (Albacete), Valhermoso de la Fuente (Cuenca) y Casas de Benítez (Cuenca).

5. Actuaciones en materia de energías renovables

5.1. Panorámica general: un modelo afín y a la vez contrario al escenario de “sostenibilidad ambiental” de la Ley de Economía Sostenible

En el período analizado debemos destacar la promulgación de dos normas en materia de energías renovables que nos parece merecen un comentario particular. La primera de ellas es el Decreto 6/2011, de 1 de febrero, que regula las actuaciones en materia de certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

y crea el Registro autonómico de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios y Entidades de Verificación de la Conformidad. La segunda es la Ley 9/2001, de 21 de marzo, por la que se crea un impuesto supuestamente ambiental para gravar las instalaciones de producción de energía eólica, el llamado Canon Eólico. Sin perjuicio del análisis en detalle de ambas normas, creemos conveniente enmarcar su significación en el nuevo escenario de la “sostenibilidad ambiental” que configura la tan discutida y discutible Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante, LES). Y ello porque en esta normativa se abordan algunas reformas de gran calado en el modelo energético y, en especial, por su importancia en el modelo económico español, la rehabilitación y la vivienda, aparte de la relevante configuración del modelo de transporte y movilidad sostenible. Como valoración general en relación con las dos normas autonómicas que se ven implicadas en este modelo de carácter básico y programático a nivel estatal, se advierte que, en materia energética, la creación de un impuesto que grava una actividad de fomento de energías renovables no resulta acorde con el espíritu de la LES, pues en ella, muy al contrario, se pretende la incentivación fiscal y no el gravamen en las actividades contempladas, a fin de fomentar la inversión en este tipo de energías que pretenden cumplir el ambicioso objetivo de reducción de las emisiones contaminantes y, a largo plazo, la lucha contra el cambio climático. El intentar enmascarar este canon eólico bajo el pretexto de socializar el gasto que suponen las instalaciones no nos parece un buen argumento en pro de la sostenibilidad ambiental, por más que los fines recaudatorios de este impuesto estén justificados desde otra perspectiva. Llama la atención que entre los principios y objetivos del modelo energético sostenible destacan el desarrollo de condiciones adecuadas para la existencia de un mercado energético competitivo (art. 77) y de una planificación energética indicativa a nivel estatal donde “la legislación ordenará los incentivos públicos necesarios” (art. 79.4). Es evidente que el modelo en materia de energías renovables que viene aplicando nuestra Comunidad Autónoma, bastante gravoso en términos generales y que ahora se ve afectado con un nuevo canon impositivo, se aleja del esquema de sostenibilidad energética pretendido por la LES.

Todo lo contrario sucede con la segunda de las normas aprobadas en el período por nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto sobre eficiencia energética de los edificios, que, es de destacar, incluso se ha adelantado a los fines explícitos de las nominadas “políticas públicas para un medio urbano sostenible” que prevé la LES. Así, en el

complejo título III de la norma —dedicado al escenario de la “sostenibilidad ambiental”—, su capítulo IV —sobre rehabilitación y vivienda— contiene, entre las medidas de primer orden para lograr el modelo pretendido, el fomento de los edificios eficientes desde el punto de vista ambiental, aplicando “la mejor tecnología disponible, para minimizar las emisiones contaminantes, el consumo del agua, energía y producción de residuos, mejorando su gestión”. Como veremos en el detalle de la norma autonómica, tales objetivos, que por otro lado vienen a materializar en nuestro ordenamiento las recientes normas europeas al respecto, se ven cumplidos sobradamente.

5.2. Eficiencia energética de los edificios: la adaptación a la normativa europea y las medidas que se adelantan a las “políticas públicas para un medio urbano sostenible” de la Ley de Economía Sostenible

El Decreto 6/2011, de 1 de febrero, regula las actuaciones en materia de certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y crea el Registro autonómico de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios y Entidades de Verificación de la Conformidad. Con esta norma se pretende la adaptación al ámbito autonómico de la reciente Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, que refunde las anteriores normas europeas referidas a la eficiencia energética de los edificios, siendo su objeto primero la mejora del diseño de la edificación de acuerdo con los conocimientos técnicos actuales en materia de utilización eficiente de la energía, y, particularmente, la mejora de la cultura en materia de ahorro energético entre la ciudadanía para favorecer la adquisición y el uso de edificios medioambientalmente sostenibles. La norma europea contempla tres tipos de medidas básicas: la creación de una metodología de cálculo de la eficiencia integrada de los edificios y la aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética en edificios nuevos o reformados; de resultados de ello, la emisión del denominado *certificado energético*, que se pondrá a disposición de los usuarios del edificio, y, finalmente, el establecimiento de un mecanismo de inspección periódica en las instalaciones que contribuyen de forma notable al consumo total de la energía, esto es, la calefacción, la climatización y el agua caliente sanitaria.

La adaptación de la primera directiva europea sobre la materia, de 2002, a la normativa española fue realizada por el RD 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y se adopta una etiqueta de eficiencia energética, común a todo el territorio nacional, cuya exhibición es obligatoria en edificios ocupados por autoridades públicas o instituciones que presten servicio a un número importante de personas.

En Castilla-La Mancha, la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética, ya preveía en su artículo 16 la colaboración entre las consejerías competentes en materia de energía y vivienda para la adaptación e implantación de normativa en materia de eficiencia energética de los edificios; y, en su artículo 18, la certificación energética mediante la implantación de sistemas y medidas de control necesarias para garantizar medidas de ahorro y eficiencia energética.

El Decreto de 2011 se ocupa de desarrollar ambos preceptos de acuerdo con la norma básica estatal con el objeto de, como señala su exposición de motivos, “promover en la Comunidad Autónoma la eficiencia energética en la edificación, ofreciendo a consumidores y usuarios información objetiva del comportamiento energético de los edificios, favoreciendo una mayor transparencia en el mercado inmobiliario así como la mejora de la calidad de las edificaciones necesaria para adecuarse a las exigencias energéticas en la edificación”.

A. El procedimiento de certificación de la eficiencia energética y verificación de la conformidad: un ejemplo de autorregulación

El proceso previsto para alcanzar estos objetivos consiste en la obtención de una calificación energética y su certificación verificada para el proyecto o el edificio terminado y del derecho al uso de una etiqueta acreditativa de dicha eficiencia energética.

Los certificados verificados de proyecto y edificio terminado se integran en un registro de carácter público con el propósito de ofrecer a los posibles usuarios del edificio una información relevante acerca del comportamiento energético de este.

Para realizar algunas de estas funciones, se contempla, como claro fenómeno de autorregulación, la llamada *entidad de verificación de la conformidad*, definida como aquel agente externo encargado de verificar la certificación de eficiencia energética, que tiene la consideración de organismo colaborador autorizado en materia de energías

renovables, ahorro y eficiencia energética de acuerdo con la Ley 1/2007.

El procedimiento para la calificación de eficiencia energética de un edificio se regula en el artículo 5 de la norma, pudiendo obtenerse a partir de dos procedimientos alternativos:

a) Bien mediante el procedimiento general, de carácter prestacional, y de manera directa, a través de un programa informático de desarrollo de la metodología de cálculo del anexo I del Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Para ello, podrán utilizarse:

– El programa informático de referencia, que tiene la consideración de documento reconocido para todo el territorio nacional, llamado Calener.

– Un programa informático alternativo que cumpla las especificaciones técnicas de la metodología de cálculo, esté validado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 47/2007 y cuente con el reconocimiento de los departamentos ministeriales competentes en materia de energía y de vivienda, a propuesta de la Comisión Asesora (art. 14 del RD 47/2007).

b) O bien mediante la aplicación de una opción simplificada que tenga la consideración de “documento reconocido”. Este se define por la propia norma como documento técnico sin naturaleza reglamentaria, siempre que cuente con el reconocimiento conjunto de los departamentos ministeriales competentes en materia de energía y de vivienda.

El siguiente punto del proceso es la emisión del correspondiente “certificado de eficiencia energética”, que según el artículo 6 del Decreto tiene como objeto dar constancia escrita de la calificación de eficiencia energética. Sus efectos son meramente informativos, sin que suponga el cumplimiento de ningún otro requisito que pueda exigirse a los edificios, y tiene una validez de 10 años, transcurridos los cuales puede ser renovado o actualizado.

Cumplidos estos trámites, sigue el procedimiento de control para la “verificación de la conformidad”, donde se comprueba que la calificación y consecuente certificación otorgadas al edificio son correctas. Esta función, cuyo procedimiento todavía está pendiente, corresponderá a las entidades de control de calidad que obtengan la acreditación prevista en la norma, debiendo efectuarse en un plazo máximo de seis meses desde la terminación del edificio. Y en el caso de que la calificación de eficiencia

energética resultante del proceso de verificación sea diferente de la calificación asignada por el proyectista o la dirección facultativa, como resultado de diferencias con las especificaciones previstas, la entidad encargada de la verificación lo comunicará al promotor o propietario para que se adopten las medidas pertinentes para la subsanación o bien se modifique la calificación y, en consecuencia, el certificado de eficiencia energética del edificio terminado, en el sentido que proceda. El plazo para subsanar o modificar la calificación y otorgar el certificado del edificio terminado será de un mes a contar desde el día en que la entidad de verificación de la conformidad comunique al promotor, y por escrito, tal extremo.

Junto a este control, se prevé también un proceso de control externo, a realizar por entidades de verificación de la conformidad que deben ser organismos o entidades de control acreditados para el campo reglamentario de la edificación y sus instalaciones térmicas, o técnicos independientes cualificados, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la norma en cuanto a régimen de incompatibilidades, responsabilidad civil e inscripción en el registro habilitado al efecto, que también es creado por la norma que comentamos.

En fin, la norma establece determinadas prescripciones relativas a la publicidad de la certificación energética mediante la “etiqueta de eficiencia energética”, en los términos establecidos en la norma estatal básica, etiqueta que es de obligatoria exhibición en los casos prescritos normativamente:

- a. Edificios ocupados por la Administración pública.
- b. Edificios ocupados por instituciones que presten servicios públicos.
- c. Edificios para viviendas con protección pública.
- d. Edificios con superficie útil superior a 1.000 m² en los que se hayan invertido fondos públicos.

B. Registro autonómico de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios y Entidades de Verificación de la Conformidad

El artículo 12 de la norma crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios y Entidades de Verificación de la Conformidad de Castilla-La Mancha, y lo adscribe a la Dirección General competente en materia de energía. Se configura como

un registro público que debe, además, regirse por las previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En la norma se detalla asimismo el procedimiento de inscripción de los certificados de eficiencia energética (art. 13) y de las entidades de verificación de la conformidad (art. 14), y se establece como plazo máximo de resolución por el órgano competente un período de tres meses, entendiéndose estimada la solicitud en caso de no dictarse resolución expresa en dicho plazo. La inscripción en el Registro tiene un horizonte temporal de cinco años, y puede ser renovada acreditando el mantenimiento de los requisitos que la permitieron.

5.3. Creación del Canon Eólico y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha

A. La naturaleza del Canon Eólico: ¿un impuesto realmente ecológico?

La reciente Ley 9/2011, de 21 de marzo, crea un nuevo impuesto en materia de energías renovables, el denominado Canon Eólico, que define como prestación patrimonial pública de naturaleza finalista y extrafiscal, y concibe como “instrumento destinado a internalizar los costes sociales, económicos y ambientales generados por la energía eólica y dirigido a estimular y promover el desarrollo tecnológico, con especial incidencia en lo referente a la potencia de los aerogeneradores”. Según la exposición de motivos de la norma, la medida contribuirá a minimizar las afectaciones derivadas de este tipo de actividad, mediante la reducción de la superficie afectada por las instalaciones y la consiguiente liberación de territorio para su aprovechamiento general. Con esta regulación impositiva se incide, por lo tanto, en el actual marco regulatorio de las energías renovables en Castilla-La Mancha desde una perspectiva creemos que justificada seguramente desde el punto de vista hacendístico, aunque, señálemoslo desde el primer momento, no se trata de un impuesto ambiental o ecológico. La justificación de la medida en el preámbulo de la norma no puede ser más explícita: “[...] el establecimiento de una compensación que favorezca no solo a los emplazamientos que soportan las instalaciones de generación eólica, sino que se haga extensivo al resto del territorio regional que, en mayor o menor medida, se ve afectado de forma directa o indirecta por dicha actividad; todo ello para contribuir a la socialización de los beneficios derivados de la implantación de instalaciones eólicas al conjunto del

territorio soporte de la actuación, incluyendo el afectado por las líneas eléctricas de evacuación de la energía generada por los parques eólicos, y potenciar un reequilibrio territorial”. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente ecológico, es evidente que la imposición de un nuevo gravamen no constituye una medida de apoyo al fomento de las energías renovables, en este caso, eólicas, ni mucho menos a la creación del entorno competitivo pretendido por las líneas estratégicas de los planes de fomento de las energías limpias que nos vienen impuestas desde el ámbito europeo.

En esta misma línea de intentar profundizar en la imposición autonómica de carácter medioambiental, y con el fin de allegar recursos para la financiación de las políticas de conservación y mejora del medio natural, se modifican en la misma Ley los tipos impositivos del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. Ello se justifica, aquí seguramente de modo más apropiado, en el actual proceso de consolidación fiscal para garantizar el sostenimiento de las finanzas públicas regionales sin merma de los gastos de carácter social, educativo y sanitario en la Comunidad Autónoma. Mediante la disposición adicional se modifica el artículo 8 de la Ley 16/2005, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, estableciéndose nuevos tipos impositivos para el primero de los impuestos citados.

Con carácter complementario, se crea en la Ley el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha, como instrumento de consolidación del modelo energético regional recogido en la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y la eficiencia energética en Castilla-La Mancha, y que se integrará con los recursos derivados del Canon Eólico.

La Ley consta de 18 artículos, estructurados en tres capítulos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. Las tres disposiciones transitorias se refieren, sucesivamente, a la vigencia de los convenios firmados con los promotores eólicos al amparo de los planes eólicos estratégicos aprobados en el marco del Decreto 58/1999, de 15 de mayo, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica, a través de parques eólicos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, hoy derogado; al cómputo del plazo de presentación de la declaración de alta en el impuesto tras la entrada en vigor de la Ley, y a la financiación del Fondo para el

Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en el ejercicio 2011.

B. La regulación del Canon Eólico

El capítulo II de la Ley establece el Canon Eólico, regulando su naturaleza y objeto, la afectación de los ingresos derivados de este y sus elementos esenciales: hecho imponible, período impositivo y devengo, sujetos pasivos y responsables solidarios del impuesto, base imponible, tipos de gravamen y cuota tributaria. Y cierra con el conjunto de normas de gestión necesarias para su aplicación. El detalle de esta regulación revela diáfananamente la pretensión del legislador autonómico, que intenta vestir como tributo ecológico un gravamen de estricta finalidad recaudatoria, bien alejada de los prístinos fines de una imposición real de tipo medioambiental, por lo que resulta, a la postre, más disuasoria que otra cosa para futuros inversores en energías renovables.

El Canon Eólico se define en el artículo 2 de la norma como “ingreso compensatorio y prestación patrimonial de derecho público de naturaleza extrafiscal y real”, diseñado “con el fin de preservar la cohesión, el equilibrio territorial y el medio natural, en cuanto entorno físico soporte de la actividad económica vinculada al aprovechamiento industrial del viento, en su consideración de bien jurídico protegido”, y pensado “al objeto de contribuir al desarrollo de un modelo energético y económico sostenible”. En este contexto, los ingresos derivados del Canon se afectarán a la implementación de actuaciones de impulso y promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables y al etéreo destino de “cumplimiento de fines de carácter socio-económico y tecnológico en Castilla-La Mancha”. Otra parte de los ingresos recaudados se destinará a la consolidación del modelo energético regional, a través del Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía, en la cuantía que anualmente se establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la Junta.

Todos los parques eólicos quedan sujetos a este canon, con la excepción de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica siguientes: las destinadas al autoconsumo eléctrico, y las de carácter experimental y de investigación cuya potencia máxima no sea superior a cinco megavatios, siempre y cuando no constituyan un parque eólico en los términos previstos en el Decreto 20/2010, de 20 de

abril, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Son sujetos pasivos del Canon en calidad de contribuyentes las personas físicas o jurídicas o las entidades que, bajo cualquier título, lleven a cabo la explotación de un parque eólico o de instalaciones de generación eólica aunque no sean titulares de una autorización administrativa para su instalación. Y la base imponible se define como la suma de unidades de aerogeneradores existentes en un parque eólico situado en el territorio de la Comunidad Autónoma, determinándose la cuota tributaria por aplicación a la base imponible de los siguientes tipos de gravamen trimestrales:

- En parques eólicos que dispongan de hasta 2 aerogeneradores: 0 euros por cada unidad de aerogenerador.
- En parques eólicos que dispongan de entre 3 y 7 aerogeneradores: 489 euros por cada unidad de aerogenerador.
- En parques eólicos que dispongan de entre 8 y 15 aerogeneradores: 871 euros por cada unidad de aerogenerador.
- En parques eólicos que dispongan de más de 15 aerogeneradores:
 - a) Cuando el número de aerogeneradores sea igual o inferior a la potencia instalada del parque medida en megavatios: 1.233 euros por cada unidad de aerogenerador.
 - b) Cuando el número de aerogeneradores sea superior a la potencia instalada del parque medida en megavatios: 1.275 euros por cada unidad de aerogenerador.

C. El Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía

El capítulo III crea el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía. En él se determinan la finalidad y financiación del Fondo, mediante la afectación parcial de la recaudación del Canon Eólico (hasta un máximo del 50% de la recaudación por este concepto), y se encarga su gestión a la Consejería competente en materia de energía. El fin primero de este fondo es “estimular el avance tecnológico asociado a la generación de energía renovable y el uso racional de la energía” (art.1), y se crea, como especifica el artículo 15, “para la aplicación de actuaciones globales en el ámbito de la energía, y concretamente en el de las energías

renovables y para promover el ahorro y la eficiencia energética”. Su destino preferente será la realización de proyectos de actuación que podrán consistir en diseños de programas, estudios y planificaciones energéticas que contribuyan al desarrollo energético regional y a la adopción de políticas energéticas públicas, así como en proyectos de inversión en el sector de las energías renovables, con especial atención a proyectos de I+D+i en la vertiente de innovación y transferencia tecnológica.

6. Residuos

6.1. La incorporación de medios telemáticos en materia de residuos peligrosos y destrucción de vehículos tras la baja de su vida útil

Paulatinamente, la Administración regional va incorporando en sus procedimientos técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto autonómico 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En materia ambiental, son ya varios los procedimientos que se han ido adaptando a esta política de impulso de la Administración electrónica. En el período que analizamos, dos normas innovan el ordenamiento en esta cuestión.

La primera de ellas es la Orden de 21 de diciembre de 2010, que regula la presentación electrónica obligatoria de la documentación que controla el traslado de residuos peligrosos dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, aprovechando la capacidad técnica y económica de algunos de los colectivos afectados por las obligaciones o deberes previstos en la normativa de aplicación. En virtud de esta orden se establece imperativamente la utilización de medios electrónicos en el envío al órgano competente de la Administración regional de la documentación que controla el traslado de residuos peligrosos dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, siendo voluntaria para los pequeños productores de residuos peligrosos que no estén acogidos al régimen simplificado de la Orden de 21 de agosto de 2000 (que regula los documentos a emplear por los recogedores-transportistas autorizados en Castilla-La Mancha). De modo que las personas físicas o jurídicas que generen más de 10 toneladas al año de residuos peligrosos y las que gestionen residuos de dicha naturaleza, incluidos los recogedores-

transportistas, deberán utilizar las aplicaciones informáticas habilitadas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) para la presentación de los documentos relativos a los traslados de residuos peligrosos que se inicien o finalicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se pueden utilizar tanto los sistemas de firma electrónica incorporados al documento nacional de identidad (DNI) como los sistemas de firma electrónica avanzada admitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Con esta medida, además de conseguir una mayor agilidad en el cumplimiento de los trámites, se pretende la reducción de las cargas administrativas, de los costes económicos, del impacto ambiental, así como de los costes de transporte y archivo de documentos. Asimismo, desde un punto de vista estadístico, la aplicación informática correspondiente permitirá disponer de la información en tiempo real, lo que mejorará la gestión administrativa y el ejercicio de la actividad de planificación y control de los órganos competentes.

La segunda norma es la Orden de 21 de diciembre de 2010, que regula el procedimiento para la presentación y tramitación electrónica obligatoria de los certificados de destrucción de vehículos al final de su vida útil y de determinada información relativa a la gestión ambiental de los residuos generados por ellos. Como justifica la exposición de motivos, esta norma se explica por el elevado número de copias de certificados de destrucción de vehículos que recibe anualmente el órgano competente de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y por el hecho de que se trate de trámites de mera comunicación que, normalmente, una vez recibidos no generan una respuesta de la Administración a los interesados que los envían. Esta circunstancia hace que los trámites del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre (sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, que incorpora a nuestro derecho interno la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2002), el de recepción de las copias de dichos certificados y el de los informes sobre la gestión ambiental que llevan los centros autorizados de tratamiento, se encuentren entre los más indicados para que sean realizados por sus interesados utilizando solo la vía de comunicación electrónica con la Administración. Asimismo, desde un punto de vista estadístico, la aplicación informática correspondiente permitirá disponer de dicha información en tiempo real, lo que mejorará la gestión administrativa y el control reglamentario.

Además, la norma dice aprovechar el precedente administrativo introducido por la Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos contaminados al final de su vida útil, que establece la obligatoriedad para los centros autorizados de tratamiento de tramitar las bajas definitivas en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico mediante el sistema de baja telemática.

6.2. El desarrollo del Plan de Gestión de Residuos Urbanos: autorización y notificación de puntos limpios

La Orden de 28 de enero de 2011 regula los procedimientos de autorización y notificación de puntos limpios que vayan a emplazarse o a dar servicio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Decreto 179/2009, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019. El procedimiento consta de las siguientes fases:

1) Solicitudes y documentación de la autorización del punto limpio fijo: la solicitud la realiza la entidad titular de la instalación por vía registral ordinaria o telemática conforme al correspondiente modelo normalizado (anexo I) e incorporando, como mínimo, la documentación que se refiere en el artículo 2 de la norma: informe técnico de las instalaciones, que incluirá la justificación del cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas a la instalación para su funcionamiento, así como de la normativa ambiental de aplicación vigente en el momento de la presentación de la solicitud; memoria descriptiva de la gestión del punto limpio fijo; documento de aceptación de los gestores finales (destino) de cada uno de los residuos, que deberán estar autorizados para los códigos LER correspondientes; o copia de la ordenanza reguladora del punto limpio fijo, en el caso de que la entidad local titular de la instalación disponga de ella, o de cualquier otra ordenanza que regule la gestión de los diferentes residuos que se recojan en el punto limpio.

2) Tramitación y resolución de la autorización del punto limpio fijo: la autorización la otorga la Delegación Provincial correspondiente, por delegación de la Dirección General competente en materia de residuos, previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución administrativa de autorización del punto limpio fijo será de un año a contar desde la presentación de la solicitud, entendiéndose desestimada en caso contrario, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente la solicitud presentada. La

autorización tendrá una vigencia de cinco años, con renovación automática.

3) Notificación de puntos limpios móviles: el artículo 5 de la norma establece que las entidades titulares de puntos limpios móviles deberán notificar a la Delegación Provincial competente el desarrollo de las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de residuos urbanos, incorporando la información que se indica: datos de identificación del titular del punto limpio móvil; datos de identificación del gestor del punto limpio móvil en el caso de que la explotación del equipo se subcontrate; datos del punto limpio móvil (matrícula, número de contenedores y capacidad, número de carteles e información contenida en ellos y horarios de apertura); residuos que se depositan en el punto limpio móvil, así como su cantidad estimada; documento de aceptación de los gestores finales; relación de municipios a los que dará servicio.

Además, la Orden que analizamos crea la Red de Puntos Limpios de Castilla-La Mancha, adscrita a la Dirección General competente en materia de residuos, en la que se incluirán todos los puntos limpios fijos autorizados y los móviles notificados que den servicio en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Todos los puntos limpios fijos, una vez les sea otorgada la autorización, y todos los puntos limpios móviles, una vez realicen la notificación, quedan inscritos de oficio en la nueva red. Y se impone a la entidad gestora la obligatoriedad de disponer de un libro de registro de incidencias e información interna que contendrá, como mínimo: el número de visitas diarias, el tipo y la cantidad de residuos depositados, los gestores autorizados a los que se entrega cada residuo, la cantidad de estos y la fecha de entrega. Este libro de registro podrá tener formato digital, por lo que la Consejería competente en materia de residuos pondrá un modelo a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes y deberá estar a disposición de la Dirección General competente en materia de residuos, o de la Delegación Provincial correspondiente, siempre que sea solicitada por esta.

7. Novedades en materia de montes: la creación del Registro de Montes Protectores y el Registro de Montes Singulares de Castilla-La Mancha y la actualización de los convenios y consorcios de repoblación forestal

En primer lugar, destacamos la Orden de 28 de marzo de 2011 (DOCM de 13 de abril),

por la que se crean el Registro de Montes Protectores y el Registro de Montes Singulares de Castilla-La Mancha, y que regula su contenido y la tramitación de los expedientes de declaración, modificación o pérdida de tal condición. Se trata en ambos casos de registros administrativos públicos que radicarán en la Consejería con competencias en materia de montes, o en su Dirección General correspondiente, a la que se encomienda su mantenimiento y llevanza, y en los que deberán constar cargas, gravámenes y demás derechos reales que soporten los montes incluidos en ellos. Estarán constituidos por libros foliados y cada folio se dividirá en cinco partes claramente diferenciadas denominadas *identificación*, *asientos*, *números de asiento*, *notas marginales* y *diligencia* (descritas en el artículo 2 de la norma).

Podrán ser declarados monte protector o monte singular aquellos montes o terrenos forestales de titularidad pública o privada que se hallen comprendidos en alguno de los supuestos enumerados en los artículos 18.1 o 19.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se prevé para efectuar tal declaración la incoación de un expediente administrativo, que se podrá iniciar de oficio a petición de sus propietarios o de cualquier otra persona o entidad que entre sus intereses, fines, obligaciones o responsabilidades se encuentre en general la defensa de la naturaleza, y cuyas fases son descritas en el artículo 4 de la Orden. Además, se prevé un modelo de identificación para cada monte protector o monte singular mediante una clave única que se asignará en la propia resolución que otorga su carácter de protector o singular (nueve caracteres alfanuméricos; los dos primeros siempre serán las letras MP para los montes protectores y MS para los montes singulares, el tercero y el cuarto corresponderán al número de la provincia en donde radique el monte y los cinco últimos serán de carácter numérico y correlativos). En fin, la norma establece los supuestos en que procede la desclasificación, cuando las circunstancias que determinaron su declaración hubieran desaparecido, y esta estuviera amparada por resolución administrativa o judicial emitida por órgano competente, ya que sin esta resolución de efectos jurídicos constituyentes el causante de esta deberá proceder a la restauración de los terrenos afectados.

La otra norma que merece comentario en esta crónica es la Orden de 28 de marzo de 2011, reguladora del régimen aplicable a los consorcios y convenios de repoblación forestal (DOCM de 13 de abril de 2011, rectificación de errores DOCM de 6 de mayo de 2011). El objeto de la norma es establecer el procedimiento por el cual se podrán

sustituir los consorcios y convenios de repoblación forestal suscritos entre la Administración forestal y los propietarios de montes por otras figuras de carácter administrativo: “montes de utilidad pública”, “montes singulares”, “montes protectores” y “acuerdos de mantenimiento de masa forestal”, siendo de aplicación a los consorcios y convenios de repoblación forestal vigentes en la actualidad y sobre terrenos radicados en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. La razón de ser de esta norma deriva de un hecho histórico que ha sido corregido normativamente en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, que la Orden que se analiza desarrolla finalmente.

En efecto, los consorcios y convenios de repoblación forestal constituyeron en su momento las herramientas que la Administración utilizó para cumplir los objetivos del Plan de Repoblación Forestal que el Patrimonio Forestal del Estado ejecutó sobre diversos terrenos, cuya disponibilidad adquirió mediante estos tipos de contratos administrativos. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, normativa de carácter básico, en su disposición adicional primera dispone que los consorcios y convenios de repoblación forestal, amparados por la legislación anterior a su promulgación —la Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el patrimonio forestal del Estado, la Ley de 8 de junio de 1957 de Montes y la Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal, derogadas por la Ley 43/2003—, continuarán vigentes hasta la fecha de su finalización, e indica la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan métodos para su sustitución ventajosos tanto para sus titulares como para la propia Administración. Por lo tanto, a esta actualización procede la norma que analizamos, que respeta la normativa estatal básica mencionada.

Por otro lado, la Administración reconoce los beneficios que las masas forestales proporcionan a la sociedad, por lo que ha puesto en marcha para los terrenos privados el Programa de Reforestación de Tierras Agrarias de Castilla-La Mancha, con el que se ha conseguido la repoblación forestal de casi 120.000 hectáreas. Ello no ha supuesto coste ni carga alguna para sus beneficiarios, mientras que los consorcios y convenios de repoblación forestal, basados en legislaciones anteriores, suponen todavía para sus titulares importantes servidumbres y gravosas cuentas de débito a la Administración. Con esta norma se pretende, pues, la actualización del modelo, de acuerdo con la Ley 3/2008, para mantener las masas forestales creadas sin costos económicos para sus titulares, igualando, en la medida de lo posible, las condiciones de desarrollo de ambos

planes de repoblación.

Así, los artículos 3 y 4 de la Orden describen pormenorizadamente las situaciones administrativas resultantes del nuevo modelo y su régimen de gestión, que se sintetizan en los siguientes puntos:

a) En consorcios o convenios de repoblación forestal constituidos sobre montes de utilidad pública se podrá condonar la deuda existente a la resolución del consorcio o convenio para la repoblación forestal. Los terrenos afectados, excepto en el supuesto de que exista una resolución de declaración de demanialidad prevalente, no podrán perder el carácter de dominio público forestal.

b) En consorcios o convenios de repoblación forestal constituidos sobre montes públicos no demaniales, se podrá condonar la deuda existente a la resolución del consorcio o convenio para la repoblación forestal existente siempre y cuando estos montes sean adscritos al demanio público forestal y se proceda a su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha. Como en el supuesto anterior, tampoco podrán perder sin más el carácter de demanio público forestal.

El régimen de gestión resultante para estos dos tipos de convenios de repoblación forestal será el definido para los montes de utilidad pública en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

c) En los consorcios o convenios de repoblación forestal constituidos sobre montes de propiedad privada, se podrá condonar la deuda siempre y cuando sean declarados montes protectores o montes singulares, si cumplen las condiciones requeridas por los artículos 18.1 o 19.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Esta declaración conllevará, según los casos, su inclusión en el Registro de Montes Protectores o en el Registro de Montes Singulares.

El régimen de gestión para este tipo de convenios es el que rige para los montes protectores o montes singulares en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. En estos montes, la Dirección General competente en materia forestal, previa conformidad del titular, podrá efectuar inversiones destinadas al interés general, sin que estas supongan costo alguno para el propietario ni exigencia de una compensación económica a favor de la Administración.

La gestión de estos montes corresponderá a su propietario y se regirá por un proyecto de gestión forestal sostenible, redactado de acuerdo con la normativa en materia de

ordenación de montes. Si no lo tuviese en vigor en el momento de su declaración, con carácter general se establece un plazo de dos años para su redacción y presentación ante la Dirección General competente en materia forestal, órgano competente para su aprobación. Transcurrido este plazo, y una vez comunicado a su propietario, la Administración podrá asumir su redacción con cargo a la propiedad del monte. En fin, estos montes tendrán prioridad en el otorgamiento de cualquier tipo de incentivo económico de carácter forestal que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente conceda mediante convocatoria pública de ayudas.

d) En los casos excepcionales en que consorcios o convenios constituidos sobre montes de propiedad privada no reúnan cualquiera de las condiciones previstas en los artículos 18.1 y 19.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, se podrán sustituir los actuales consorcios y convenios por otros acuerdos contractuales que garanticen la conservación de las masas forestales creadas.

Este nuevo acuerdo solo conllevará la condonación de la deuda existente cuando por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se acredite que los beneficios indirectos y el interés social que genere el mantenimiento de la cubierta vegetal superen los de las rentas directas del monte, y este sea gestionado mediante la aplicación de un instrumento de gestión forestal sostenible. La duración de este acuerdo, que tiene carácter administrativo, será, al menos, igual al tiempo que reste para que se cumpla el consorcio o convenio al que sustituye. Los montes objeto de este acuerdo tendrán la consideración de montes en régimen especial administrativo.

El régimen de gestión para estos consorcios o convenios será el que resulte de la aplicación del acuerdo suscrito.

Por otro lado, la incoación del expediente y el detalle de su tramitación para proceder a la actuación de la previsión normativa son regulados en los artículos 5 y 6 de la norma. Finalmente, para el control y la administración de estos montes se prevé el establecimiento de unos inventarios de carácter público, que reciben la denominación de Elencos de Montes Acordados, Elenco de Montes Consorciados y Elenco de Montes Convenidos, en los que figuren los principales datos de estos montes. Estos inventarios radicarán en la Dirección General competente en materia forestal, que se encargará de su mantenimiento y llevanza.

Sumari: 1. Panoràmica i valoració general de les actuacions ambientals en el període de gener a maig de 2011. 2. Actuacions en matèria d'espais naturals: 2.1. Declaració de parc natural de la Sierra Norte de Guadalajara. 2.2. Declaració de parc natural d'El Valle de Alcuia y Sierra Mare. 2.3. Aprovació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de Las Lagunas y Albardinales del Gigüela i declaració de la reserva natural de Las Lagunas y Albardinales del Gigüela. 2.4. El Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Las Hoces del Cabriel. 3. La modificació de la llei de conservació de la natura en matèria de caça, espècies exòtiques i reproducció en captivitat d'espècies amenaçades. 4. Regulació institucional i orgànica d'organismes amb competència en matèria d'aigües: el Consell de l'Aigua i l'ens Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa. 4.1. L'organització de l'aigua com a recurs natural i de valor mediambiental: els òrgans autonòmics de gestió i protecció de les aigües i la importància de la participació de les parts interessades. 4.2. El Consell de l'Aigua de Castella-la Manxa com a òrgan consultiu i de participació en matèria d'aigües. 4.3. L'ens de dret públic Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa: regulació estatutària. 4.4. L'ampliació del programa de protecció de les aigües enfront de la contaminació d'origen agrària imposada per la Comissió Europea. 5. Actuacions en matèria d'energies renovables. 5.1. Panoràmica general: un model afí i al mateix temps contrari a l'escenari de "sostenibilitat ambiental" de la llei d'economia sostenible. 5.2. Eficiència energètica dels edificis: l'adaptació a la normativa europea i les mesures que s'avancen a les "polítiques públiques per a un medi urbà sostenible" de la llei d'economia sostenible. A. El procediment de certificació de l'eficiència energètica i verificació de la conformitat: un exemple d'autoregulació. B. Registre Autonòmic de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis i Entitats de Verificació de la Conformitat. 5.3. Creació del cànon eòlic i el Fons per al Desenvolupament Tecnològic d'Energies Renovables i Ús Racional de l'Energia a Castella-la Manxa. A. La natura del cànon eòlic: un impost realment ecològic? B. La regulació del cànon eòlic. C. El Fons per al Desenvolupament Tecnològic d'Energies Renovables i Ús Racional de l'Energia. 6. Residus. 6.1. La incorporació de mitjans telemàtics en matèria de residus perillosos i destrucció de vehicles després de la baixa de la seva vida útil. 6.2. El desplegament del Pla de Gestió de Residus Urbans: autorització i notificació de punts nets. 7. Novetats en matèria de forests: la creació dels registres de forests protectores i forests singulars de Castella-la Manxa i l'actualització dels convenis i consorcis de repoblació forestal.

1. Panoràmica i valoració general de les actuacions ambientals en el període de gener a maig de 2011

El període analitzat ha destacat especialment tant quantitativament com qualitativament pel que fa a la normativa que s'ha aprovat. Els àmbits i sectors que s'han vist afectats pel legislador i l'executiu autonòmic han estat molts, entre els quals destaquem la declaració de parcs naturals que consoliden les actuacions del període anterior a la Sierra Norte de Guadalajara, Alcuia i Sierra Madrona i algun pla d'ordenació de recursos naturals nou; la modificació de la llei autonòmica de conservació de la natura en matèria de caça, per donar suport normatiu a la pràctica actual de la caça i la cria de falconeria. En matèria organitzativa, finalment s'ha aprovat la norma que regula el Consell de l'Aigua de Castella-la Manxa —amb la qual cosa s'ha completat la composició institucional de l'Agència de l'Aigua—, orfe fins al moment d'òrgan de representació i participació social en el govern de l'aigua. Junt amb aquesta regulació, també s'han aprovat els Estatuts de l'ens de dret públic Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa, que substitueix l'anterior ens públic Aigües de Castella-la Manxa i n'adapta la regulació orgànica i de funcionament a la normativa vigent. En l'àmbit de les energies renovables també s'han produït dues actuacions de valoració dispar, que

explicarem en detall: una, la creació de l'impost sobre les instal·lacions d'energia eòlica, l'anomenat "cànon eòlic" i de l'inespecífic Fons per al Desenvolupament Tecnològic d'Energies Renovables i Ús Racional de l'Energia a Castella-la Manxa que, malgrat l'ampul·lositat del nom, té funcions ben concises i d'ordre merament financer; i una altra que ha de valorar-se molt positivament, perquè avançant-se fins i tot a la legislació estatal que ha de traslladar la normativa comunitària referida a l'eficiència energètica dels edificis, i fins i tot a les previsions sobre el particular que conté la llei recent d'economia sostenible, configura un nou règim en matèria d'eficiència i certificació energètica dels edificis de Castella-la Manxa. En matèria de residus les actuacions del període també han estat diverses. Cal destacar la creació de l'anomenada Xarxa de Punts Nets i la incorporació de les noves tecnologies de la informació per tramitar electrònicament el registre de destrucció de vehicles després de la seva vida útil i el trasllat de residus perillosos, amb la qual cosa el sistema administratiu ha guanyat eficàcia i s'ha adaptat a les exigències normatives de l'Administració electrònica regional aprovades recentment. Des d'aquesta perspectiva, també han estat objecte d'atenció, i actualitzant una situació de fet especialment onerosa per als particulars, els convenis i consorcis de repoblació forestal, que s'adeqüen a la normativa forestal estatal i autonòmica aprovada ja fa temps. En aquest àmbit destaca així mateix la creació dels registres de forests protectores i forests singulars de Castella-la Manxa, la situació anòmala dels quals es corregeix amb la important norma aprovada en aquest període.

Per tant, en línies generals, la valoració del període analitzat és prou positiva, de la qual cal destacar l'actualització i la revisió de polítiques i normatives per adaptar-les a les normatives europees, estatals i autonòmiques recents.

2. Actuacions en matèria d'espais naturals

El període analitzat ha estat prou fructífer a l'hora de continuar les actuacions anteriors que han de seguir la tramitació oportuna i les actuacions de les quals vam donar compte en la crònica anterior. Així, per mitjà de la llei corresponent, s'ha aprovat la declaració del parc natural de la Sierra Norte de Guadajara i també dels parcs naturals d'Alcudia i Sierra Madrona. En aquest context, i com a nova actuació, en aquest període s'aprova un nou Pla d'Ordenació de Recursos Naturals per a Las Lagunas y Albardinares del Gigüela i es declara aquest paratge com a reserva natural en l'àmbit autonòmic.

2.1. Declaració de parc natural de la Sierra Norte de Guadalajara

El Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Sierra Norte de Guadalajara, aprovat pel Decret 215/2010, de 28 de setembre, preveu establir la figura de protecció de parc natural per a l'espai natural localitzat en diversos termes municipals de la província de Guadalajara, que ocupava una superfície aproximada de 117.898 hectàrees, ja que reunia els requisits que exigia l'article 41 de la Llei autonòmica 9/1999, de 26 de maig, de conservació de la natura.

D'acord amb aquesta norma, l'objectiu específic d'aquesta figura jurídica, aplicada a la realitat de l'espai en qüestió, és assegurar la conservació dels valors naturals de la zona, procurant-ne la restauració si estan degradats, i fomentar els aprofitaments tradicionals i el turisme de natura, de manera que quedin assentades les bases d'un desenvolupament sostenible. Així s'aprova la Llei 5/2011, de 10 de març, de declaració del parc natural de la Sierra Norte de Guadalajara (DOCM de 22 de març de 2011).

El relleu de la Sierra Norte de Guadalajara és molt accidentat, conforma un conjunt muntanyós que inclou diverses serres i massissos, on es localitzen els tres cims més alts de Castella-la Manxa: el Pico del Lobo (2.273 m), el Cerrón (2.199 m) i la Peña Cebollera Vieja o Tres Provincias (2.129 m). Aquests sistemes muntanyosos són solcats, a més a més, per les conques hidrogràfiques dels rius Jaramilla, Jarama, Lozoya, Sorbe i Bornova, tots pertanyents a la conca del Tajo. Els importants embassaments del Vado, Beleña i Alcorlo tanquen aquesta valuosa orografia. Per això, no és estrany que la seva riquesa faunística i paisatgística sigui tan rellevant. Aquesta zona destaca per la gran diversitat litològica completada amb enclavaments de gran interès mineralògic i petrològic (Hiendelaencina, El Cardoso, etc.), i per la gran abundància i diversitat d'elements geomorfològics, la majoria considerats d'interès especial, segons la Llei 9/1999. A més, l'àrea es caracteritza per la seva excepcional importància botànica, ja que acull espècies úniques a escala regional. La Sierra Norte de Guadalajara també té una gran importància per les comunitats de fauna, com destaca el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals, en què sobresurt la comunitat de rapaços rupícoles, amb poblacions d'àguila cuabarrada, catalogada a Castella-la Manxa "en perill d'extinció".

Des del punt de vista del paisatge, l'àrea inclou paisatges de muntanya únics a Castella-la Manxa per les característiques excepcionals i l'elevada naturalitat. És un exemple conegut en la geologia l'anomenada "arquitectura negra", element del patrimoni cultural

de conservació prioritària. No hem d'oblidar que en el parc natural nou s'ubiquen tres espais inclosos en la Xarxa Regional d'Àrees Protegides: el parc natural del Hayedo de Tejera Negra, la reserva natural del Pico del Lobo-Cebollera i la reserva fluvial del riu Pelagallinas.

Doncs bé, a fi de garantir l'homogeneïtat i de simplificar la gestió del territori, la llei que comentem elimina les figures del parc natural del Hayedo de Tejera Negra i la reserva natural del massís del Pico del Lobo-Cebollera, que s'integren en el nou parc natural com una zona de protecció especial, amb un règim d'usos i activitats propi. Això, com bé aclareix el preàmbul de la norma, no ha de suposar que aquests espais perdin la singularitat, ja que ambdós representen la biodiversitat i els valors naturals del conjunt de parc natural, i, per tant, són referència ineludible en la seva gestió específica. Ateses l'especificitat i les característiques de la reserva fluvial del riu Pelagallinas, que a més és refugi de pesca, cal que continuï en vigor.

Al mateix temps, el massís del Pico del Lobo-Cebollera, d'especial rellevància natural, s'inclou en la zona d'especial protecció per a les aus i lloc d'importància comunitària anomenada "Sierra de Ayllón", i s'integra, per tant, en la Xarxa Natura 2000, en aplicació de la Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, i de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació d'hàbitats naturals i de flora i fauna silvestres, la qual cosa suposa el compromís de la comunitat autònoma per mantenir els hàbitats i les espècies emparats per ambdós normes en un estat de conservació favorable, així com de dotar l'espai natural d'un pla de gestió adequat a les seves necessitats de conservació.

Una altra de les mesures de la llei ha estat desafectar la reserva de caça Sonsaz, inclosa originàriament en la reserva nacional del mateix nom des de 1973, que va passar a designar-se reserva de caça "en el àmbito territorial de Castilla-La Mancha" (ex DA 1a de la Llei 2/1993, de 15 de juliol, de caça de Castella-la Manxa). Aquesta desafectació legal es produeix una vegada s'ha complert el principal dels seus objectius de recuperar poblacions de cabirol, i atesa l'existència de figures alternatives que poden garantir l'oferta de caça social.

En definitiva, la Llei 5/2011 condensa l'aplicació del règim de protecció que preveu el Pla d'Ordenació per al territori proposat com a parc natural, els límits del qual s'ajusten

a una base cartogràfica més recent i detallada. En aquest sentit, estableix el règim aplicable als usos, als aprofitaments i a les activitats, conté el mandat d'elaboració del Pla Rector d'Ús i Gestió, i crea les figures de la Junta Rectora, com a òrgan consultiu, i del director conservador com a responsable de la gestió. Complementàriament, estableix l'Àrea d'Influència Socioeconòmica a fi de mantenir el parc natural, fomentar el desenvolupament rural i compensar socioeconòmicament les poblacions afectades, i aconseguir que, com en altres espais de la regió per a les seves respectives zones d'influència, sigui un element de garantia de l'ús sostenible dels recursos naturals i d'impuls socioeconòmic dels municipis que el conformen.

2.2. Declaració de parc natural d'El Valle de Alcudia y Sierra Madrona

El Pla d'Ordenació de Recursos Naturals d'El Valle de Alcudia y Sierra Madrona, aprovat per mitjà del Decret 214/2010, de 28 de setembre, preveu la figura de protecció de parc natural per a l'espai natural localitzat a la província de Ciudad Real, als termes municipals d'Almodóvar del Campo, Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava i Solana del Pino, amb una superfície aproximada de 149.463 hectàrees. La Llei 6/2011, de 10 de març (DOCM 22 de març de 2011), ha procedit a la declaració de parc natural.

Aquest futur parc natural és un dels espais del territori manxec que té un grau de conservació excel·lent dels ecosistemes, la qual cosa li atorga una importància excepcional des del punt de vista de la conservació del patrimoni geològic, la biodiversitat i el paisatge de Castella-la Manxa. Prova d'això n'és el reconeixement que se li ha estat donant, materialitzat en la declaració de part del territori amb altres figures de protecció com són les àrees crítiques per a espècies tan emblemàtiques com l'àguila imperial ibèrica, el voltor negre, la cigonya negra o el linx ibèric, els monuments naturals Los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida, el monument natural de la llacuna volcànica de La Alberquilla i el volcà d'Alhorín, i les microreserves del Túnel de Niefla, de la Mina de los Pontones, del refugi de quiròpters de Fuencaliente i parcialment Los Túneles de Ojailén.

La zona presenta punts d'interès geològic molt rellevants de diversa natura i característiques diferents, que destaquen per la seva singularitat i la seva representativitat en l'àmbit regional. Molts es corresponen amb algun dels elements

geomorfològics d'interès especial que figuren catalogats en la Llei 9/1999, de 26 de maig, de conservació de la natura. Quant a la vegetació, la que es troba en l'àmbit territorial d' El Valle de Alcuàdia està molt modelada per l'ús ramader tradicional, i es troben extensions àmplies cobertes de deveses d'alzina, pastures i altres pastius anuals, mentre que en la part de Sierra Madrona es conserven vestigis de diferents tipus de boscos mediterranis en bon estat. La seva importància zoològica també és extraordinària, i s'inclou en la zona d'especial protecció per a les aus anomenada "Sierra Morena". Actualment té la consideració de zona sensible per a la conservació de l'àguila imperial ibèrica, el voltor negre i la cigonya negra. La zona és també molt important per a l'àguila daurada, l'àguila cuabarrada, l'aufrany, el voltor, el falcó pelegrí i el duc. Pel que fa als mamífers, aquesta serra constitueix l'hàbitat per a unes quantes poblacions de llop i linx amenaçades en extrem.

Adicionalment, s'ha posat de manifest la seva importància per conservar nombrosos hàbitats i tàxons inclosos en els annexos I i II de la Directiva 92/43/CEE, així com espècies incloses en l'annex I de la Directiva 2009/147/CE, i es configura com una àrea important per conservar la biodiversitat de la Unió Europea susceptible de formar part de la Xarxa Natura 2000.

Com en el cas del parc natural de la Sierra Norte de Guadaluària, la llei estableix, de manera pràcticament idèntica, el règim jurídic del nou parc, i igualment determina una àrea d'influència socioeconòmica amb fins idèntics.

2.3. Aprovació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de Las Lagunas y Albardinales del Gigüela i declaració de la reserva natural de Las Lagunas y Albardinales del Gigüela

Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de Castella-la Manxa de 2 de desembre de 2008 es va acordar iniciar el procediment per elaborar i aprovar el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals per a Las Lagunas y Albardinales del Gigüela. Els estudis que es van dur a terme en la fase inicial de redacció van confirmar sense cap dubte la rellevància, la singularitat i l'interès de les llacunes, tant des del punt de vista paisatgístic i geològic, com biològic, per la fauna i la flora.

L'objectiu principal del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals que acaba d'aprovar el Decret 13/2011, de 22 de març (DOCM 25 de març), és adequar la gestió dels seus

recursos naturals, en especial dels protegits, a la Llei 9/1999, de conservació de la natura. I, al mateix temps, contribuir a mantenir les espècies d'aus assenyalades en l'annex I de la Directiva 79/409/CEE en un estat favorable, i els hàbitats i les espècies dels annexos I i II de la Directiva 92/43/CEE, presents al territori.

El Pla d'Ordenació afecta totalment o parcialment quatre termes municipals, a les províncies de Toledo i Ciudad Real, amb un perímetre que engloba una superfície de 4.827 hectàrees.

La zona s'inclou en el lloc d'importància comunitària ES4250010 "Humedales de la Mancha" i en la zona d'especial protecció per a les aus ES0000091 "Humedales de la Mancha". Al sud es troba el refugi de fauna format per les finques "Dehesa Presa Rubia", "Rabo de Pastrana" i "Largas del Gigüela", i tot l'àmbit territorial del Pla d'Ordenació forma part de la Reserva de la Biosfera de la Manxa Humida.

El riu Gigüela, el principal curs d'aigua de la zona, travessa la reserva natural de nord-est a sud, i es caracteritza per l'elevada irregularitat. D'altra banda, el riu Riánsares, afluent del Gigüela, entra a la reserva natural pel nord, i desemboca a la llacuna del Taray, exemple qualificat de plana d'inundació associada a llit fluvial, a banda de tot un conjunt d'aiguamolls artificials d'importància singular per a l'avifauna i on es localitza vegetació molt interessant. Des del punt de vista faunístic, el valor més destacat són les poblacions d'aus aquàtiques associades a les llacunes. És una zona propícia per a la cria i hivernada de nombroses espècies amenaçades.

En el procediment administratiu d'elaboració del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals s'han seguit les prescripcions del títol II de la Llei 9/1999 de 26 de maig, de conservació de la natura, s'ha atorgat audiència a les parts interessades, i s'han realitzat els tràmits d'informació pública i consulta als interessos socials i institucionals afectats. El Consell Assessor de Medi Ambient també ha informat favorablement el Pla d'Ordenació.

2.4. El Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Las Hoces del Cabriel

Encara que no sigui una norma de Castella-la Manxa, atès que afecta un espai protegit intercomunitari, hem de recordar que el Decret 45/2011, de 29 d'abril, ha aprovat el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Las Hoces del Cabriel, en compliment dels articles que van del 37 al 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat,

d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i en l'article 30 de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de biodiversitat.

3. La modificació de la llei de conservació de la natura en matèria de caça, espècies exòtiques i reproducció en captivitat d'espècies amenaçades

La Llei 11/2011, de 21 de març (BOE 3 de maig), ha modificat dos preceptes de la Llei 9/1999, de conservació de la natura, l'article 71, referit a la tinença, la cria en captivitat i el comerç d'espècies exòtiques, i l'article 82, sobre regulació de la reproducció en captivitat de fauna amenaçada. Les reformes de la llei de caça de Castella-la Manxa i el Decret autonòmic 11/2009, de 10 de febrer, pel qual es regula la pràctica de la falconeria a la nostra comunitat autònoma ja exigien aquesta revisió. Però, fonamentalment, una vegada que la UNESCO ha declarat la falconeria com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat el passat 17 de novembre de 2010. Davant de les espècies amenaçades, la llei de conservació de la natura prohibia la cria en captivitat d'aquests ocells rapaços, mentre que la llei de caça, des de 2006, autoritzava a caçar-ne i a reproduir-ne en captivitat, la qual cosa no deixava de ser una paradoxa. D'altra banda, la pràctica de la falconeria, que es va regular en el Decret 11/2009, sostenia com una de les raons per autoritzar aquesta activitat l'existència d'un mercat legal d'aquestes aus provinent de la cria en captivitat, que possibilitava un nou escenari que feia possible la realització d'aquesta pràctica sense posar en perill les poblacions silvestres d'ocells rapaços.

Amb la reforma normativa per mitjà de la llei autonòmica que comentem, es permet la cria en captivitat sotmetent-la als controls i al compliment dels requisits legals que estableixen els organismes competents, que en el cas de la nostra comunitat autònoma recau en la conselleria competent en matèria de caça i sempre tractant-se d'una activitat reglada sotmesa a autorització prèvia. És important recordar que, actualment, la falconeria es practica exclusivament amb exemplars nascuts i criats en captivitat, amb un procés que regula i controla la Secretaria General de Comerç Exterior, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, que és l'autoritat administrativa designada en l'àmbit de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES).

4. Regulació institucional i orgànica d'organismes amb competència en matèria d'aigües: el Consell de l'Aigua i l'ens Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa

4.1. L'organització de l'aigua com a recurs natural i de valor mediambiental: els òrgans autonòmics de gestió i protecció de les aigües i la importància de la participació de les parts interessades

L'aigua es concep com a patrimoni, un actiu social, ambiental i econòmic directament relacionat amb el benestar dels ciutadans. L'aigua és, efectivament, un bé comú de totes les persones i, en aquest sentit, els ciutadans i la societat en general, tenim el dret a utilitzar aquest recurs i a gaudir-lo; però al mateix temps tenim l'obligació de contribuir a evitar que es deteriorin les masses d'aigua i de preservar-les, en condicions de quantitat i qualitat adequades, en benefici de les generacions futures.

Per això, a Castella-la Manxa es van constituir el Consell Regional de l'Aigua (Decret 41/2006, de 18 d'abril) i més recentment l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa, creada per la Llei 6/2009, de 17 de desembre, i constituïda formalment des del 7 de juliol de 2010. Actualment aquest és l'organisme administratiu mitjançant el qual el Govern regional defensa els drets dels habitants de Castella-la Manxa en matèria d'aigua i participa en la planificació hidrològica nacional. No obstant això, la protecció dels recursos hídrics no sols ha de ser un compromís dels poders públics, sinó també una responsabilitat de tots els sectors, usuaris i agents implicats en l'ús i en la gestió de l'aigua i de la ciutadania en general, que ha d'incorporar l'eficiència en l'ús de l'aigua i el respecte al medi ambient.

La preocupació per assolir un model de desenvolupament sostenible que faci compatible la garantia d'aigua suficient per al creixement i el desenvolupament econòmic i poblacional, amb el respecte al medi ambient, exigida per la Directiva 2000/60/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, s'ha traduït en una implicació i participació creixent en la defensa dels drets de l'aigua en totes les comunitats autònomes. I en aquest sentit, i perquè així ho exigeix la normativa estatal en matèria d'aigües, resultava imperiosa la regulació del règim jurídic d'un òrgan de consulta i de participació en matèria d'aigua, en el qual han de tenir cabuda totes les administracions públiques, agents, sectors i usuaris implicats i la societat en general.

Com a peculiaritat en la nostra autonomia, destaca l'especial transcendència que s'atribueix a aquest òrgan a l'hora de revisar els plans hidrològics. Castella-la Manxa, per la seva situació geogràfica en el centre peninsular, està present en set demarcacions hidrogràfiques (Tajo, Guadiana, Xúquer, Segura, Guadalquivir, Ebre i Duero), i és important que en totes i cada una d'aquestes demarcacions hidrogràfiques puguin veure's satisfetes, amb totes les garanties, les nostres necessitats hídriques presents i futures i que s'assegurin cabals ambientals suficients per garantir l'estructura i la funcionalitat dels nostres ecosistemes. En aquest sentit, l'òrgan que es regula en virtut d'aquesta llei, ha de comptar, entre els seus representants i en funció del seu àmbit territorial, amb usuaris de les diferents demarcacions hidrogràfiques, i ha de participar activament en tot el procés de planificació i posterior gestió i seguiment dels plans hidrològics que afecten Castella-la Manxa.

4.2. El Consell de l'Aigua de Castella-la Manxa com a òrgan consultiu i de participació en matèria d'aigües

D'acord amb l'esperit participatiu que ha de presidir l'organització eficaç i sostenible de l'aigua, la Llei 8/2011, de 21 de març, crea el Consell de l'Aigua de Castella-la Manxa, de manera que compleix el que mana l'article 3.3 de la Llei 6/2009, de 17 de desembre, per la qual es crea l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa.

Segons aquesta norma, el Consell de l'Aigua de Castella-la Manxa és un òrgan consultiu i de participació en matèria d'aigua, adscrit —a efectes administratius— a l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa. La natura de les seves funcions és variada, i afavoreix les que fan referència a l'ús sostenible del recurs i, en concret, d'acord amb l'article 2 d'aquesta norma:

- a) Informar els avantprojectes de llei i altres disposicions generals en matèria d'aigües que hagin de proposar-se al Consell de Govern de Castella-la Manxa per aprovar-los.
- b) Informar els plans i projectes d'interès regional que afectin substancialment els usos d'aigua.
- c) Plantejar iniciatives destinades a l'ús racional i la millora de la qualitat i al bon estat ecològic de les masses d'aigua en l'àmbit de Castella-la Manxa.

d) Emetre informes i atendre les consultes plantejades en els supòsits que les normes disposin.

e) Emetre informes sobre qüestions relatives a l'aigua que es puguin consultar al Consell de Govern o a l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa i a les Corts de Castella-la Manxa.

f) Participar en la planificació hidrològica que realitzi l'Administració de l'Estat i emetre un informe sobre els documents que se sotmetin a informació pública.

La composició i l'estructura del Consell és molt semblant a la dels seus homònims autonòmics:

- la Presidència (que ocupa el president de l'Agència de l'Aigua)
- la Vicepresidència (que recau en el titular de Direcció-Gerència de l'Agència)
- els vocals nats (titulars de quasi totes les direccions generals de l'Administració regional, fins a dotze i que s'afegeixen al titular de la Direcció-Gerència de l'entitat de dret públic Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa, de l'òrgan gestor competent en matèria d'universitats, investigació i innovació i el lletrat-cap del Gabinet Jurídic de la Junta de Comunitats)
- vocalies designades del Consell de l'Aigua, en representació de l'Administració hidràulica de l'Estat, administració local, organitzacions socials, econòmiques i ambientals i experts de reconegut prestigi (un representant de l'Administració hidràulica de l'Estat, dos representants de la Federació Regional de Municipis i Províncies, un representant de l'associació empresarial més representativa de la regió, dos representants dels sindicats de treballadors més representatius de la regió, dos representants d'associacions de defensa del medi ambient amb àmbit d'actuació en la regió, un representant de la Universitat de Castella-la Manxa, un representant del Consell de Cambres Oficials de Comerç i Indústria de Castella-la Manxa i dues persones expertes de reconegut prestigi en matèries relacionades amb l'aigua)
- vocalies designades del Consell de l'Aigua, en representació d'usuaris de totes les demarcacions hidrogràfiques que afecten Castella-la Manxa, que corresponen a tres representants de les associacions professionals agràries més implantades a la regió; un representant de les cooperatives agroalimentàries de Castella-la

Manxa; un representant dels consumidors, i nou representants dels usos més significatius de les diferents demarcacions hidrogràfiques en què participa Castella-la Manxa.

En aquesta estructura orgànica, la Secretaria del Consell correspon a personal funcionari de l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa designat pel president, que actua amb veu però sense vot.

Així mateix, la llei regula el sistema de destitució i substitució dels membres, el règim de les convocatòries i funcionament, les normes perquè es constitueixi de manera vàlida i l'ordre de les sessions i actes del Consell.

4.3. L'ens de dret públic Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa: regulació estatutària

El Decret 7/2011, de 8 de febrer, regula els Estatuts de l'ens públic Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa. Com a recordatori, la Llei 12/2002, de 27 de juny, reguladora del cicle integral de l'aigua a la nostra comunitat autònoma, va crear l'entitat de dret públic Aigües de Castella-la Manxa, que habilita el Consell de Govern a dictar els Estatuts d'aquest ens. Després, la Llei 6/2009, de 17 de desembre, per la qual es crea l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa, en la disposició addicional primera, substitueix la denominació de l'entitat per la d'Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa, i manté la seva personalitat jurídica i la seva plena capacitat d'obrar. A més, adscriu l'entitat a l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa, a través de la seva Direcció-Gerència de la. La llei esmentada va aprofitar per incorporar una sèrie de modificacions en el funcionament i en l'organigrama de l'entitat, que obligaven a adaptar l'estatut vigent fins ara (Decret 167/2002, de 26 de novembre).

El Decret que analitzem conté els estatuts d'aquest ens de dret públic, en desplegament de les previsions legals esmentades. S'hi regulen detalladament les funcions dels òrgans, i s'afavoreix l'exercici de les competències de gestió i administració per part dels òrgans unipersonals (Presidència, Vicepresidència i Direcció-Gerència), i es reserven les funcions de deliberació i presa de decisions finals i estratègies d'actuació al Consell d'Administració.

A més, les normes sobre el funcionament de l'entitat, el règim jurídic i econòmic estan clarament inspirades en la legislació bàsica per al funcionament dels òrgans col·legiats, amb submissió estricta, per tant, al dret administratiu.

Com a ens dependent funcionalment de l'Agència de l'Aigua, la desconcentració funcional i objectiva de les seves competències se centren en l'execució i en la gestió de qualsevol classe d'infraestructures hidràuliques, i la gestió d'infraestructures hidràuliques d'interès regional, així com la gestió i recaptació del cànon d'adducció i del cànon de depuració previstos en la Llei 12/2002, de 27 de juny, reguladora del cicle integral de l'aigua de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa. A més, en el seu objecte destaca la realització de totes les activitats en relació amb l'abastiment i la depuració de l'aigua que li encomani la Junta de Comunitats. I entre les quals destaca, a fi del nostre estudi, la facultat de "propuesta de la suscripción de convenios y la actuación coordinada de las respectivas competencias sobre abastecimiento de agua y sobre alcantarillado, saneamiento, depuración, reutilización de las aguas residuales y regadíos" (art.3.h) i la creació i el manteniment dels censos de sistemes d'abastiment i de depuració de la regió (art.3.i).

4.4. L'ampliació del programa de protecció de les aigües enfront de la contaminació d'origen agrària imposada per la Comissió Europea

L'Ordre de 7 de febrer 2011 modifica l'Ordre de 4 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient, que aprova el programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari designades a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa (DOCM de 15 d'abril de 2011). Aquesta regulació deriva del Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries (que va incorporar la Directiva 91/676/CEE al nostre ordenament jurídic), que va atribuir a les comunitats autònomes la competència per designar les zones vulnerables (totes les àrees del territori que per escolament o per percolació contribueixin a aquest tipus de contaminació). A Castella-la Manxa aquesta designació es du a terme per mitjà de la Resolució de 7 d'agost de 1998, de la Resolució de 10 de febrer de 2003 i de l'Ordre de 21 de maig de 2009. Com a pas previ per a aquesta designació, s'han de determinar les masses d'aigua afectades, o amb el risc d'estar-ho, per l'aportació de nitrats d'origen

agrari, entenent que el programa d'actuació vigent a Castella-la Manxa fins al moment és el que conté l'Ordre de 4 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient.

La necessitat de disposar d'una nova norma actualitzada, a la qual respon l'Ordre recent de 2011 queda plenament justificada tenint en compte tres fets determinants: el recent dictamen motivat de la Comissió Europea, en el qual considera que es detecten determinades irregularitats en el nostre programa autonòmic; el que estableix la disposició transitòria de l'Ordre de 21 de maig de 2009, de la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient, per la qual s'aprova el manteniment de les zones vulnerables designades anteriorment i s'incorpora "Campo de Calatrava"; i, finalment, la designació de les aigües afectades per mitjà de la Resolució de 4 de desembre de 2009, de la Direcció General de l'Aigua, per la qual es determinen les aigües afectades per la contaminació, o en risc d'estar-ho, per l'aportació de nitrats d'origen agrari en les conques intercomunitàries.

Per tant, la nova ordre aprova un nou programa d'actuació, amb vigència de quatre anys, aplicable a les zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari a Castella-la Manxa, que corregeix els dèficits assenyalats per la Comissió Europea i amplia les zones vulnerables recollides anteriorment, per evitar una dispersió normativa més gran. Així, s'inclouen en les zones vulnerables esmentades els termes municipals següents:

- a) Algora (Guadalajara), a la zona vulnerable "Alcarria-Guadalajara"
- b) Corral-Rubio (Albacete), a la zona vulnerable "Mancha Oriental"
- c) Pétrola (Albacete), a la zona vulnerable "Mancha Oriental"

A més, a fi d'incloure els termes municipals que en les resolucions de designació pertanyien a altres i de donar més coherència territorial a les zones designades, aquestes s'amplien amb els termes municipals següents: a la zona vulnerable "Alcarria-Guadalajara": 1) Marchamalo, 2) San Andrés del Congosto, 3) Terrinches i 4) Almoguera (totes a Guadalajara); a la zona vulnerable "Mancha Occidental": Arenales de San Gregorio (Ciudad Real); c. a la zona vulnerable "Mancha Oriental": 1) Pozo Cañada (Albacete), 2) Valhermoso de la Fuente (Conca) i 3) Casas de Benítez (Conca).

5. Actuacions en matèria d'energies renovables

5.1. Panoràmica general: un model afí i al mateix temps contrari a l'escenari de "sostenibilitat ambiental" de la llei d'economia sostenible

En el període analitzat hem de destacar les dues normes que s'han promulgat en matèria d'energies renovables que ens sembla que mereixen un comentari particular. La primera és el Decret 6/2011, d'1 de febrer, que regula les actuacions en matèria de certificació energètica d'edificis a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa i crea el Registre Autonòmic de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis i Entitats de Verificació de la Conformitat. La segona és la Llei 9/2001, de 21 de març, per la qual es crea l'impost suposadament ambiental per gravar les instal·lacions que produeixen energia eòlica, l'anomenat "cànon eòlic". Sense perjudici de l'anàlisi detallada d'ambdues normes, creiem convenient emmarcar-ne la significació en el nou escenari de la "sostenibilitat ambiental" que configura la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (d'ara endavant LES), tan discutida i discutible. I això perquè en aquesta normativa s'aborden algunes reformes de gran calat en el model energètic i, en especial, per la seva importància en el model econòmic espanyol, la rehabilitació i l'habitatge, a banda de la configuració rellevant del model de transport i mobilitat sostenible. Com a valoració general amb relació a les dues normes autonòmiques que es veuen implicades en aquest model de caràcter bàsic i programàtic en l'àmbit estatal, s'adverteix que en matèria energètica, la creació d'un impost que gravi una activitat de foment d'energies renovables no resulta d'acord amb l'esperit de la LES, perquè, molt al contrari, pretén la incentivació fiscal i no el gravamen en les activitats previstes, a fi de fomentar la inversió en aquest tipus d'energies que pretenen complir l'ambició objectiu de reduir les emissions contaminants i, a llarg termini, la lluita contra el canvi climàtic. Intentar emascarar aquest cànon eòlic amb el pretext de socialitzar la despesa que suposen les instal·lacions no ens sembla un bon argument en pro de la sostenibilitat ambiental, per més que els fins recaptatoris d'aquest impost estiguin justificats des d'una altra perspectiva. Crida l'atenció que entre els principis i objectius del model energètic sostenible destaquen el desplegament de condicions adequades perquè existeixi un mercat energètic competitiu (art.77) i d'una planificació energètica indicativa en l'àmbit estatal on *"la legislación ordenará los incentivos públicos necesarios"* (art.79.4). És evident que el model en matèria d'energies renovables que aplica la nostra comunitat

autònoma, prou costós en termes generals i que ara es veu afectat amb un nou cànon impositiu, s'allunya de l'esquema de sostenibilitat energètica que pretén la LES.

Amb la segona de les normes que ha aprovat la nostra comunitat autònoma en el període succeeix el contrari, el decret sobre eficiència energètica dels edificis que, cal destacar que fins i tot s'ha avançat als fins explícits de les anomenades "polítiques públiques per a un medi urbà sostenible" que preveu la LES. Perquè en l'escenari de la "sostenibilitat ambiental" a què es dedica el complex títol III de la norma, el capítol IV sobre rehabilitació i habitatge conté, entre les mesures de primer ordre per aconseguir el model pretès, el foment dels edificis eficients des del punt de vista ambiental, aplicant "la mejor tecnología disponible, para minimizar las emisiones contaminantes, el consumo del agua, energía y producción de residuos, mejorando su gestión". Com veurem en el detall de la norma autonòmica, aquests objectius, que d'altra banda en el nostre ordenament materialitzen les normes europees recents respecte d'això, es compleixen àmpliament.

5.2. Eficiència energètica dels edificis: l'adaptació a la normativa europea i les mesures que s'avancen a les "polítiques públiques per a un medi urbà sostenible" de la llei d'economia sostenible

El Decret 6/2011, d'1 de febrer, regula les actuacions en matèria de certificació energètica d'edificis a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa i crea el Registre Autonòmic de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis i Entitats de Verificació de la Conformitat. Amb aquesta norma es pretén adaptar a l'àmbit autonòmic la recent Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, que refon les anteriors normes europees referides a l'eficiència energètica dels edificis, l'objectiu primer de la qual és millorar el disseny de l'edificació d'acord amb els coneixements tècnics actuals en matèria d'utilització eficient de l'energia i, particularment millorar la cultura en matèria d'estalvi energètic en la ciutadania afavorint l'adquisició i l'ús d'edificis mediambientalment sostenibles. La norma europea preveu tres tipus de mesures bàsiques: la creació d'una metodologia de càlcul de l'eficiència integrada dels edificis i l'aplicació de requisits mínims d'eficiència energètica en edificis nous o reformats; de resultes d'això, l'emissió de l'anomenat "certificat energètic", que s'ha de posar a disposició dels usuaris de l'edifici; l'establiment d'un mecanisme d'inspecció periòdica en les instal·lacions que

contribueixen de forma notable al consum total de l'energia, això és la calefacció, la climatització i l'aigua calenta sanitària.

L'adaptació de la primera directiva europea sobre la matèria, de 2002, a la normativa espanyola va ser realitzada pel Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció i s'adopta una etiqueta d'eficiència energètica, comuna a tot el territori nacional, l'exhibició de la qual és obligatòria en edificis que ocupen autoritats públiques o institucions que presten servei a un nombre important de persones.

A Castella-la Manxa, la Llei 1/2007, de 15 de febrer, de foment de les energies renovables i incentivació de l'estalvi i eficiència energètica, ja preveia en l'article 16 la col·laboració entre les conselleries competents en matèria d'energia i habitatge per adaptar i implantar la normativa en matèria d'eficiència energètica dels edificis. I en l'article 18, la certificació energètica per mitjà de la implantació de sistemes i mesures de control necessàries per garantir mesures d'estalvi i eficiència energètica.

Aquest Decret de 2011 desplega ambdós preceptes d'acord amb la norma bàsica estatal amb l'objectiu "*de promover en la Comunidad Autónoma la eficiencia energética en la edificación, ofreciendo a consumidores y usuarios información objetiva del comportamiento energético de los edificios, favoreciendo una mayor transparencia en el mercado inmobiliario así como la mejora de la calidad de las edificaciones necesaria para adecuarse a las exigencias energéticas en la edificación*", com assenyala l'exposició de motius.

A. El procediment de certificació de l'eficiència energètica i verificació de la conformitat: un exemple d'autoregulació

El procés previst per aconseguir aquests objectius, consisteix a obtenir la qualificació energètica i la seva certificació verificada per al projecte o l'edifici acabat i el dret a utilitzar una etiqueta acreditativa de l'eficiència energètica.

Els certificats verificats de projecte i edifici acabat s'integren en un registre de caràcter públic amb el propòsit d'oferir informació rellevant sobre el comportament energètic dels edificis als possibles usuaris.

Per realitzar algunes d'aquestes funcions, es preveu, com a clar fenomen d'autoregulació, l'anomenada "entitat de verificació de la conformitat", definida com l'agent extern encarregat de verificar la certificació d'eficiència energètica, que té la consideració d'organisme col·laborador autoritzat en matèria d'energies renovables, estalvi i eficiència energètica d'acord amb la Llei 1/2007.

L'article 5 de la norma regula el procediment per qualificar l'eficiència energètica d'un edifici, que es pot obtenir basant-se en dos procediments alternatius:

a) Bé per mitjà del procediment general, de caràcter prestacional, i de manera directa, a través d'un programa informàtic de desenvolupament de la metodologia de càlcul de l'annex I del procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció. Pera la qual cosa, poden utilitzar-se:

– El programa informàtic de referència que té la consideració de document reconegut per a tot el territori nacional, anomenat Calener.

– Un programa informàtic alternatiu que compleixi les especificacions tècniques de la metodologia de càlcul i que estigui validat d'acord amb el que estableix el Reial decret 47/2007, i que tingui el reconeixement dels departaments ministerials competents en matèria d'energia i d'habitatge, a proposta de la Comissió Assessora (art.14 RD 47/2007).

b) O bé per mitjà d'una opció simplificada que tingui la consideració de "document reconegut". La mateixa norma el defineix com a document tècnic sense naturalesa reglamentària, sempre que tingui el reconeixement conjunt dels departaments ministerials competents en matèria d'energia i habitatge.

El punt següent del procés és l'emissió del "certificat d'eficiència energètica" corresponent, que segons l'article 6 del Decret té com a objectiu donar constància escrita de la qualificació d'eficiència energètica. Els seus efectes són merament informatius, sense que suposi el compliment de cap altre requisit que pugui exigir-se als edificis i té una validesa de deu anys, que un cop transcorreguts, es pot renovar o actualitzar.

Realitzats aquests tràmits, el procediment de control per a la "verificació de la conformitat" continua, en el qual es comproven que la qualificació i la conseqüent certificació atorgades a l'edifici siguin correctes. Aquesta funció, el procediment de la qual encara està pendent, l'efectuen les entitats de control de qualitat que obtinguin

L'acreditació que preveu la norma, i s'han d'efectuar en un termini màxim de sis mesos des de l'acabament de l'edifici. I en el cas que la qualificació d'eficiència energètica resultant del procés de verificació sigui diferent de la qualificació assignada pel projectista o direcció facultativa, com a resultat de diferències amb les especificacions previstes, l'entitat encarregada de la verificació ho comunicarà al promotor o propietari perquè adopti les mesures pertinents per a l'esmena o bé es modifiqui la qualificació i, en conseqüència, el certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat, en el sentit que procedeixi. El termini per esmenar o modificar la qualificació i atorgar el certificat de l'edifici acabat és d'un mes a comptar del dia en què l'entitat de verificació de la conformitat comunica aquest extrem al promotor, i per escrit. Junt amb aquest control, també es preveu un procés de control extern, que han de realitzar les entitats de verificació de la conformitat que han de ser organismes o entitats de control acreditades per al camp reglamentari de l'edificació i les seves instal·lacions tèrmiques o tècnics independents qualificats, sempre que es compleixin els requisits que exigeix la norma quant a règim d'incompatibilitats, responsabilitat civil i inscripció en el registre habilitat a l'efecte que també és creat per la norma que comentem.

Finalment, la norma estableix determinades prescripcions relatives a la publicitat de la certificació energètica, per mitjà de "l'etiqueta d'eficiència energètica" en els termes que estableix la norma estatal bàsica. I s'ha d'exhibir obligatòriament en els casos que prescriu la normativa:

- a) Edificis ocupats per l'Administració pública.
- b) Edificis ocupats per institucions que prestin serveis públics.
- c) Edificis per a habitatges amb protecció pública.
- d) Edificis amb superfície útil superior a 1.000 m² en els quals s'hagin invertit fons públics.

B. Registre Autòmic de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis i Entitats de Verificació de la Conformitat

L'article 12 de la norma crea el Registre de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis i Entitats de Verificació de la Conformitat de Castella-la Manxa, i l'adscriu a la direcció general competent en matèria d'energia. Es configura com un registre públic

que a més ha de regir-se per les previsions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La norma detalla així mateix el procediment d'inscripció de certificats d'eficiència energètica (art.13) i de les entitats de verificació de la conformitat (art.14), i estableix com a termini màxim de resolució per l'òrgan competent tres mesos, i s'entén que la sol·licitud està estimada si no es dicta la resolució expressa en el termini esmentat. La inscripció en el registre té un horitzó temporal de cinc anys, i es pot renovar acreditant el manteniment dels requisits que la van permetre.

5.3. Creació del cànon eòlic i el Fons per al Desenvolupament Tecnològic d'Energies Renovables i Ús Racional de l'Energia a Castella-la Manxa

A. La natura del cànon eòlic: un impost realment ecològic?

La recent Llei 9/2011, de 21 de març, crea un nou impost en matèria d'energies renovables, l'anomenat "cànon eòlic", que defineix com a prestació patrimonial pública de natura finalista i extrafiscal i el concep com a "*instrumento destinado a internalizar los costes sociales, económicos y ambientales generados por la energía eólica y dirigido a estimular y promover el desarrollo tecnológico, con especial incidencia en lo referente a la potencia de los aerogeneradores*". Segons l'exposició de motius de la norma, la mesura contribueix a minimitzar les afeccions derivades d'aquest tipus d'activitat, per mitjà de la reducció de la superfície afectada per les instal·lacions i el consegüent alliberament de territori per al seu aprofitament general. Amb aquesta regulació impositiva s'incideix, per tant, en l'actual marc regulador de les energies renovables a Castella-la Manxa des d'un punt de vista creiem que justificat segurament des de l'àmbit financer, encara que, cal assenyalar-ho des del primer moment, no es tracta de cap impost ambiental o ecològic. La justificació de la mesura en el preàmbul de la norma no pot ser més explícita: "*el establecimiento de una compensación que favorezca no solo a los emplazamientos que soportan las instalaciones de generación eólica, sino que se haga extensivo al resto del territorio regional que, en mayor o menor medida, se ve afectado de forma directa o indirecta por dicha actividad; todo ello para contribuir a la socialización de los beneficios derivados de la implantación de instalaciones eólicas al conjunto del territorio soporte de la actuación, incluyendo el afectado por las líneas eléctricas de evacuación de la energía generada por los parques*

eólicos, y potenciar un reequilibrio territorial". Per tant, des del punt de vista estrictament ecològic, és evident que la imposició d'un nou gravamen no constitueix una mesura de suport al foment de les energies renovables, en aquest cas, eòliques, ni de bon tros en la creació de l'entorn competitiu que pretenen les línies estratègiques dels plans de foment de les energies netes que imposa l'àmbit europeu.

En aquesta mateixa línia d'intentar aprofundir en la imposició autonòmica de caràcter mediambiental, i a fi de al·legar recursos per finançar les polítiques de conservació i millora del medi natural, en la mateixa llei es modifiquen els tipus impositius de l'impost sobre determinades activitats que incideixen en el medi ambient. Justificant-se, aquí segurament més apropiadament, en el procés actual de consolidació fiscal per garantir el sosteniment de les finances públiques regionals sense que minvin les despeses de caràcter social, educatiu i sanitari a la comunitat autònoma. Per mitjà de la disposició addicional es modifica l'article 8 de la Llei 16/2005, de 29 de desembre, de l'impost sobre determinades activitats que incideixen en el medi ambient i del tipus autonòmic de l'impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs, i s'estableixen nous tipus impositius per al impost que hem esmentat primer.

Amb caràcter complementari, es crea, en la llei, el Fons per al Desenvolupament Tecnològic de les Energies Renovables i Ús Racional de l'Energia a Castella-la Manxa, com a instrument per consolidar el model energètic regional que recull la Llei 1/2007, de 15 de febrer, de foment de les energies renovables i incentivació de l'estalvi i l'eficiència energètica a Castella-la Manxa, i que s'integra amb els recursos derivats del cànon eòlic.

La llei consta de divuit articles, estructurats en tres capítols, d'una disposició addicional, tres disposicions transitòries i tres disposicions finals. Les tres disposicions transitòries es refereixen, successivament, a la vigència dels convenis que s'han signat amb els promotors eòlics, a l'empara dels plans eòlics estratègics aprovats en el marc del Decret 58/1999, de 15 de maig, pel qual es regula l'aprofitament de l'energia eòlica, a través de parcs eòlics, a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, avui derogat; al còmput del termini de presentació de la declaració d'alta de l'impost després que la llei entri en vigor; i al finançament del Fons per al Desenvolupament Tecnològic d'Energies Renovables i Ús Racional de l'Energia en l'exercici 2011.

B. La regulació del cànon eòlic

El capítol II de la llei estableix el cànon eòlic, en regula la naturalesa i l'objecte, l'afectació dels ingressos que se'n deriven i els elements essencials: fet imposable, període impositiu i meritació, subjectes passius i responsables solidaris de l'impost, base imposable, tipus de gravamen i quota tributària. I tanca amb el conjunt de normes de gestió necessàries per aplicar-lo. El detall d'aquesta regulació revela diàfanament la pretensió del legislador autonòmic, que intenta vestir com a tribut ecològic un gravamen amb finalitat recaptatòria estricta, ben allunyada dels fins primers d'una real imposició de tipus mediambiental, que resulta, a la fi, més dissuasòria que una altra cosa per a futurs inversors en energies renovables.

L'article 2 de la norma defineix el cànon eòlic com a "*ingreso compensatorio y prestación patrimonial de derecho público de naturaleza extrafiscal y real*", dissenyat "*con el fin de preservar la cohesión, el equilibrio territorial y el medio natural, en cuanto entorno físico soporte de la actividad económica vinculada al aprovechamiento industrial del viento, en su consideración de bien jurídico protegido*", i pensat "*al objeto de contribuir al desarrollo de un modelo energético y económico sostenible*". En aquest context, els ingressos derivats del cànon afecten la implementació d'actuacions d'impuls i de promoció de l'ús racional de l'energia i de les energies renovables i amb l'eteri objectiu de complir "*fines de carácter socio-económico y tecnológico en Castilla-La Mancha*". Tenint en compte que una altra part dels ingressos recaptats es destina a consolidar el model energètic regional, a través del Fons per al Desenvolupament Tecnològic d'Energies Renovables i Ús Racional de l'Energia, amb l'import que anualment estableix la llei de pressupostos generals de la Junta.

Tots els parcs eòlics queden subjectes a aquest cànon, amb l'excepció de les instal·lacions de producció d'electricitat a partir de l'energia eòlica següents: les que es destinen a l'autoconsum elèctric; les de caràcter experimental i d'investigació la potència màxima de les quals no sigui superior a 5 megawatts, sempre que no constitueixin un parc eòlic en els termes que preveu el Decret 20/2010, de 20 d'abril, pel qual es regula l'aprofitament de l'energia eòlica a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.

Són subjectes passius del cànon en qualitat de contribuents les persones físiques o jurídiques o entitats que, sota qualsevol títol, duguin a terme l'explotació d'un parc eòlic o d'instal·lacions de generació eòlica encara que no siguin titulars de l'autorització administrativa per a la seva instal·lació. I la base imposable es defineix com la suma d'aerogeneradors existents en un parc eòlic situat en el territori de la comunitat autònoma, i es determina la quota tributària per aplicació a la base imposable dels tipus de gravamen trimestrals següents:

- Als parcs eòlics que disposin de 2 aerogeneradors com a màxim no se'ls aplica quota.
- Als parcs eòlics que disposin d'entre 3 i 7 aerogeneradors: 489 euros per cada aerogenerador.
- Als parcs eòlics que disposin d'entre 8 i 15 aerogeneradors: 871 euros per cada aerogenerador.
- Als parcs eòlics que disposin de més de 15 aerogeneradors:
 - a) Quan el nombre d'aerogeneradors sigui igual o inferior a la potència instal·lada del parc mesurada en megawatts: 1.233 euros per cada aerogenerador.
 - b) Quan el nombre d'aerogeneradors sigui superior a la potència instal·lada del parc mesurada en megawatts: 1.275 euros per cada aerogenerador.

C. El Fons per al Desenvolupament Tecnològic d'Energies Renovables i Ús Racional de l'Energia

El capítol III crea el Fons per al Desenvolupament Tecnològic d'Energies Renovables i Ús Racional de l'Energia. S'hi determinen la finalitat i el finançament, per mitjà de l'afectació parcial de la recaptació del cànon eòlic (fins a un màxim del 50% de la recaptació per aquest concepte), i assenyala la conselleria competent en matèria d'energia com a encarregada de gestionar-lo. L'objectiu primer d'aquest Fons és *“estimular el avance tecnológico asociado a la generación de energía renovable y el uso racional de la energía” (art.1), que es crea, com especifica l'article 15: “para la aplicación de actuaciones globales en el ámbito de la energía, y concretamente en el de las energías renovables y para promover el ahorro y la eficiencia energética”*. El seu objectiu preferent és realitzar projectes d'actuació que poden consistir en dissenys de programes, estudis i planificacions energètiques que contribueixin al desenvolupament

energètic regional i a l'adopció de polítiques energètiques públiques, i projectes d'inversió en el sector de les energies renovables, amb atenció especial a projectes d'I+D+i en el vessant d'innovació i transferència tecnològica.

6. Residus

6.1. La incorporació de mitjans telemàtics en matèria de residus perillosos i destrucció de vehicles després de la baixa de la seva vida útil

L'Administració regional va incorporant gradualment en els seus procediments, tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per dur a terme la seva activitat i exercir les seves competències, d'acord amb el que disposa el Decret autonòmic 12/2010, de 16 de març, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics en l'activitat de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. En matèria ambiental, els procediments que s'han anat adaptant a aquesta política d'impuls de l'Administració electrònica són diversos. En el període que analitzem, dues normes innoven l'ordenament pel que fa a aquesta qüestió.

La primera és l'Ordre de 21 de desembre 2010, que regula la presentació electrònica obligatòria de la documentació que controla el trasllat de residus perillosos en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, aprofitant la capacitat tècnica i econòmica d'alguns dels col·lectius afectats per les obligacions o deures previstos en la normativa aplicable. En virtut d'aquesta ordre, s'estableix imperativament la utilització de mitjans electrònics a l'hora d'enviar a l'òrgan competent d'aquesta Administració la documentació que controla el trasllat de residus perillosos en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, que és voluntària per als petits productors de residus perillosos que no estiguin acollits al règim simplificat de l'Ordre de 21 d'agost de 2000 (que regula els documents que han d'emprar els recollidors transportistes autoritzats a Castella-la Manxa). De manera que les persones físiques o jurídiques que generin més de 10 tones l'any de residus perillosos i les que gestionen residus d'aquesta mena, recollidors transportistes inclosos, han d'utilitzar les aplicacions informàtica habilitades en la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, <www.jccm.es>, per presentar els documents de trasllat de residus perillosos que s'inicien o finalitzen en el territori de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa. Es poden utilitzar tant els sistemes de signatura

electrònica incorporats al document nacional d'identitat com els sistemes de signatura electrònica avançada que admet la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.

Amb aquesta mesura, a més d'aconseguir més agilitat en els tràmits, es pretén reduir càrregues administratives, costos econòmics, d'impacte ambiental, així com costos de transport i d'arxiu de documents. Així mateix, des d'un punt de vista estadístic, l'aplicació informàtica corresponent permet disposar de la informació en temps real i millorar la gestió administrativa i l'exercici de l'activitat de planificació i control dels òrgans competents.

La segona norma és l'Ordre de 21 de desembre de 2010, que regula el procediment per a la presentació i tramitació electrònica obligatòria dels certificats de destrucció de vehicles al final de la seva vida útil i de determinada informació relativa a la gestió ambiental dels residus que generen. Com l'exposició de motius justifica, aquesta norma s'explica amb l'elevat nombre de còpies de certificats de destrucció de vehicles que es reben anualment de l'òrgan competent de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa i amb el fet que es tracti de tràmits de mera comunicació, que, normalment, una vegada rebuts no generen cap resposta de l'Administració a la part interessada a qui els envien. Aquesta circumstància comporta que els tràmits del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre (sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil, que la Directiva 2000/53/CE del Parlament europeu i del Consell, de 18 de setembre de 2002, incorpora al nostre dret intern), el de recepció de les còpies d'aquests certificats i el dels informes sobre la gestió ambiental que porten els centres autoritzats de tractament, es trobin entre els més indicats perquè els interessats els realitzin utilitzant només la via de comunicació electrònica amb aquesta Administració. Així mateix, des d'un punt de vista estadístic, l'aplicació informàtica corresponent permet disposar de la informació en temps real, i millorar la gestió administrativa i el control reglamentari.

A més, la norma diu que cal aprofitar el precedent administratiu introduït per l'Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles contaminats al final de la seva vida útil, que estableix l'obligatorietat als centres autoritzats de tractament de tramitar les baixes definitives en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit per mitjà del sistema de baixa telemàtica.

6.2. El desplegament del Pla de Gestió de Residus Urbans: l'Autorització i notificació de punts nets

L'Ordre de 28 de gener 2011 regula els procediments d'autorització i notificació dels punts nets que s'han d'ubicar o han de donar servei en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, d'acord amb el Decret 179/2009, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el Pla de Gestió de Residus Urbans de Castella-la Manxa 2009-2019. El procediment consta de les fases següents:

1) Sol·licituds i documentació de l'autorització del punt net fix. L'entitat titular de la instal·lació fa la sol·licitud d'acord amb el model normalitzat corresponent (annex I), per via registral ordinària o telemàtica, i adjunta, com a mínim, la documentació que es refereix en l'article 2 de la norma: l'informe tècnic de les instal·lacions, que ha d'incloure la justificació del compliment de les condicions tècniques requerides a la instal·lació perquè funcioni, així com de la normativa ambiental d'aplicació vigent en el moment de presentar la sol·licitud; la memòria descriptiva de la gestió del punt net fix; el document d'acceptació dels gestors finals (destí) dels residus, que han d'estar autoritzats per als codis LER corresponents; o la còpia de l'ordenança reguladora del punt net fix, si l'entitat local titular de la instal·lació la té, o de qualsevol altra ordenança que reguli la gestió dels diferents residus que recull el punt net.

2) Tramitació i resolució de l'autorització del punt net fix. La delegació provincial corresponent i la delegació de la direcció general competent en matèria de residus atorguen l'autorització prèvia inspecció de les instal·lacions on s'ha de dur a terme l'activitat. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució administrativa d'autorització del punt net fix és d'un any des que es presenta la sol·licitud, la qual s'entén desestimada en cas contrari, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament la sol·licitud presentada. L'autorització té una vigència de cinc anys i es renova automàticament.

3) Notificació de punts nets mòbils. L'article 5 de la norma estableix que les entitats titulars de punts nets mòbils han de notificar a la delegació provincial competent les activitats de recollida, transport i emmagatzematge de residus urbans, i han d'incorporar la informació que s'indica: dades d'identificació del titular del punt net mòbil; dades d'identificació del gestor del punt net mòbil, en el cas que l'explotació de l'equip se

subcontracti; dades del punt net mòbil: matrícula, número i capacitat de contenidors, número i informació dels cartells i horaris d'obertura; residus que es dipositen en el punt net mòbil, així com la quantitat estimada; document d'acceptació dels gestors finals, i relació de municipis als quals dóna servei.

A més, l'ordre que analitzem crea l'anomenada Xarxa de Punts Nets de Castella-la Manxa, adscrita a la direcció general competent en matèria de residus, en la qual s'inclouen tots els punts nets fixos autoritzats, i els mòbils notificats que donen servei a la Comunitat de Castella-la Manxa. Tots els punts nets fixos, una vegada els sigui atorgada l'autorització, i tots els punts nets mòbils, una vegada realitzin la notificació, queden inscrits d'ofici en la nova Xarxa. I s'imposa que l'entitat gestora tingui el llibre registre d'incidències i informació interna que ha de contenir, com a mínim: el nombre de visites diàries, el tipus i la quantitat de residus dipositats, els gestors autoritzats als quals es lliura cada residu, la quantitat i la data en què es lliuren. Aquest llibre de registre pot tenir format digital, per la qual cosa la conselleria competent en matèria de residus posa un model a disposició dels interessats en la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. La documentació referida a cada any natural ha de mantenir-se durant els cinc anys següents i ha d'estar a disposició de la direcció general competent en matèria de residus, o de la delegació provincial corresponent, sempre que la sol·liciti.

7. Novetats en matèria de forests: la creació dels registres de forests protectores i forests singulars de Castella-la Manxa i l'actualització dels convenis i consorcis de repoblació forestal

En primer lloc, destaquem l'Ordre de 28 de març de 2011 (DOCM 13 d'abril), per la qual es creen els registres de forests protectores i forests singulars de Castella-la Manxa, que regulen el contingut i la tramitació dels expedients de declaració, modificació o pèrdua d'aquesta condició. Es tracta, en ambdós casos, de registres administratius públics que radiquen a la conselleria amb competències en matèria de forests, o a la direcció general corresponent, les quals se n'encarreguen del manteniment i l'administració, i que fan constar càrregues, gravàmens i altres drets reals que suporten les forests que inclouen. Estan constituïts per llibres foliats, i cada foli es divideix en

cinc parts clarament diferenciades: identificació, seients, número de seient, notes marginals i diligències (descrites en l'art. 2 de la norma).

Poden ser declarades forest protectora o forest singular les forests o els terrenys forestals de titularitat pública o privada que es trobin en algun dels supòsits enumerats en l'article 18.1 o 19.2 de la Llei 3/2008, de 12 de juny, de forests i gestió forestal sostenible de Castella-la Manxa. Per efectuar aquesta declaració es preveu que s'incoï un expedient administratiu que es pot iniciar d'ofici, a petició dels propietaris o de qualsevol altra persona o entitat que entre els seus interessos, fins, obligacions o responsabilitats, es trobi en general la defensa de la naturalesa, les fases de la qual descriu l'article 4 de l'ordre. A més, es preveu un model d'identificació per a cada forest protectora o forest singular, per mitjà d'una clau única que s'assigna en la mateixa resolució que atorga el caràcter de protectora o singular (nou dígits alfanumèrics; els dos primers sempre són les lletres MP de *montes protectores*, i MS de *montes singulares*, els dígits tercer i quart corresponen al nombre de la província de la forest i els cinc últims són de caràcter numèric i correlatius). Finalment, la norma estableix els supòsits avaluats de la desclassificació, quan les circumstàncies que en determinen la declaració hagin desaparegut, i aquesta estigui emparada per la resolució administrativa o judicial emesa per l'òrgan competent; perquè sense aquesta resolució d'efectes jurídics constituents, la part causant ha de restaurar els terrenys afectats.

L'altra norma que cal comentar en aquestes cròniques és l'Ordre de 28 de març de 2011, reguladora del règim aplicable als consorcis i convenis de repoblació forestal (DOCM 13 abril de 2011, rectificació d'errors DOCM 6 de maig de 2011). L'objecte de la norma és establir el procediment pel qual es poden substituir els consorcis i convenis de repoblació forestal, subscrits entre l'Administració forestal i els propietaris de forests, per altres figures de caràcter administratiu: "Forests d'Utilitat Pública", "Forests Singulares", "Forests Protectores" i "acords de manteniment de massa forestal", que s'apliquen als consorcis i convenis de repoblació forestal, vigents actualment sobre terrenys de l'àmbit territorial de Castella-la Manxa. La raó de ser d'aquesta norma deriva d'un fet històric que s'ha corregit normativament en la disposició transitòria desena de la Llei 3/2008, de 12 de juny, de forests i gestió forestal sostenible de Castella-la Manxa, que l'ordre que analitzem desplega al final.

En efecte, els consorcis i convenis de repoblació forestal van constituir en el seu moment les eines que l'Administració va utilitzar per complir els objectius del Pla de

Re població Forestal que el Patrimoni Forestal de l'Estat va executar sobre els terrenys dels quals va adquirir disponibilitat per mitjà d'aquesta mena de contractes administratius. La Llei 43/2003, forestal, modificada per la Llei 10/2006, de 28 d'abril, normativa de caràcter bàsic, en la disposició addicional primera estableix que els consorcis i convenis de repoblació forestal, emparats per la legislació anterior a la promulgació, la Llei de 10 de març de 1941, sobre patrimoni forestal de l'estat, la Llei de 8 de juny de 1957, forestal, i la Llei 5/1977, de 4 de gener, de foment de la producció forestal, i derogades per aquesta, continuen vigents fins a la data en què finalitzi, i indica la possibilitat que les comunitats autònomes estableixin mètodes per substituir-los de manera avantatjosa tant per als seus titulars com per a la mateixa Administració. Per tant, la norma que analitzem procedeix a aquesta actualització, pel que fa a la normativa estatal bàsica esmentada.

D'altra banda, l'Administració ja ha reconegut els beneficis que les masses forestals proporcionen a la societat, i ha posat en marxa el Programa de Reforestació de Terres Agràries de Castella-la Manxa als terrenys privats, amb la qual cosa s'ha aconseguit repoblar quasi 120.000 ha. Això no ha suposat cap cost ni càrrega als beneficiaris, mentre que els consorcis i convenis de repoblació forestal, basats en legislacions anteriors, suposen servituds importants i comptes onerosos de dèbit a l'Administració als seus titulars. Aquesta norma pretén, doncs, actualitzar el model, d'acord amb la Llei 3/2008, per mantenir les masses forestals creades sense costos econòmics per als seus titulars, i igualar, en la mesura que pugui, les condicions de desplegament d'ambdós plans de repoblació.

Així, els articles 3 i 4 de l'ordre descriuen detalladament les situacions administratives resultants del nou model i el seu règim de gestió, que es poden sintetitzar d'aquesta manera:

- a) En els consorcis o convenis de repoblació forestal constituïts sobre forests d'utilitat pública es pot condonar el deute existent a la resolució del consorci o conveni per a la repoblació forestal. Els terrenys afectats, excepte en el cas que hi hagi una resolució de declaració demanial prevalent, no poden perdre el caràcter de domini públic forestal.
- b) En els consorcis o convenis de repoblació forestal constituïts sobre forests públiques no demanials, es pot condonar el deute existent a la resolució del consorci o conveni per a la repoblació forestal existent sempre que aquestes forests s'adscriuin al demani

públic forestal i s'incloguin en el Catàleg de forests d'utilitat pública de Castella-la Manxa. Com en el supòsit anterior, tampoc no poden perdre sense més ni més el caràcter de demani públic forestal.

La Llei 3/2008, de 12 de juny, de forests i gestió forestal sostenible de Castella-la Manxa, defineix el règim de gestió resultant per a aquests dos tipus de convenis de repoblació forestal per a les forests d'utilitat pública.

c) En els consorcis o convenis de repoblació forestal constituïts sobre forests de propietat privada, es pot condonar el deute sempre que es declarin forests protectores o forests singulars amb les condicions que requereixen els articles 18.1 o 19.2 de la Llei 3/2008, de 12 de juny, de forests i gestió forestal sostenible de Castella-la Manxa. Aquesta declaració comporta, segons els casos, la inclusió en el Registre de Forests Protectores o en el Registre de Forests Singulars.

El règim de gestió per a aquest tipus de convenis és el que regeix per a les forests protectores o forests singulars la Llei 3/2008, de 12 de juny, de forests i gestió forestal sostenible de Castella-la Manxa. En aquestes forests, la direcció general competent en matèria forestal, prèvia conformitat del titular, pot efectuar inversions destinades a l'interès general, sense que aquestes suposin cap cost per al propietari ni l'exigència d'una compensació econòmica a favor de l'Administració.

La gestió d'aquestes forests correspon al propietari i es regeix pel projecte de gestió forestal sostenible, redactat d'acord amb la normativa en matèria d'ordenació de forests. Si no el tingués en vigor en el moment de la declaració, amb caràcter general, s'estableix un termini de dos anys per redactar-lo i presentar-lo a la direcció general competent en matèria forestal, òrgan competent perquè l'aprovi. Transcorregut aquest termini, i una vegada comunicat al propietari, l'Administració pot assumir-ne la redacció amb càrrec a la propietat de la forest. En conclusió, aquestes forests tenen prioritat en l'atorgament de qualsevol tipus d'incentiu econòmic de caràcter forestal que la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient concedeixi per mitjà de convocatòria pública d'ajudes.

d) En els casos excepcionals en què consorcis o convenis constituïts sobre forests de propietat privada no reuneixin qualsevol de les condicions que preveuen els articles 18.1 i 19.2 de la Llei 3/2008, de 12 de juny, de forests i gestió forestal sostenible de Castella-

la Manxa, es poden substituir els actuals consorcis i convenis per altres acords contractuals que garanteixin la conservació de les masses forestals creades.

Aquest nou acord només comporta la condonació del deute existent, quan la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient acrediti que els beneficis indirectes i l'interès social que generi el manteniment de la coberta vegetal superen els de les rendes directes de la forest, i aquesta es gestioni per mitjà d'un instrument de gestió forestal sostenible. La durada d'aquest acord, que té caràcter administratiu, és, almenys, igual al temps que resti perquè es compleixi el consorci o conveni al qual substitueix. Les forests objecte d'aquest acord tenen la consideració de forests en règim especial administratiu.

El règim de gestió per a aquests consorcis o convenis és el que sigui aplicable de l'acord subscrit.

D'altra banda, la incoació de l'expedient i el detall de la seva tramitació per procedir a l'actuació de la previsió normativa els regulen els articles 5 i 6 de la norma. Finalment, per controlar i administrar aquestes forests, es preveu establir inventaris de caràcter públic, que reben la denominació d'"Elenc de forests acordades", "Elenc de forests consorciades" i "Elenc de forests convingudes", en què figuren les principals dades d'aquestes forests. Aquests inventaris radiquen a la direcció general competent en matèria forestal que s'ha d'encarregar de mantenir-los i administrar-los.